



FGR

FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

COMITÉ
DE TRANSPARENCIA¹

CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2022 6 DE DICIEMBRE DE 2022

¹ En términos de lo dispuesto en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y artículo 97 de la Ley de la Fiscalía General de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República.



CONSIDERACIONES

Los días 14 y 20 de diciembre de 2018 respectivamente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la DECLARATORIA de entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República, se desprende que dicha normativa tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como **Órgano Público Autónomo**, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables, y por la cual se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Tras ello, el pasado 20 de mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se expide la **Ley de la Fiscalía General de la República**, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.

Por ello, en consideración a lo previsto en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto y Sexto del Decreto aludido, que citan:

Segundo. Se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General de la República, se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su persona titular, respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes.

Tercero. Las designaciones, nombramientos y procesos en curso para designación, realizados de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, relativos a la persona titular de la Fiscalía General de la República, las Fiscalías Especializadas, el Órgano Interno de Control y las demás personas titulares de las unidades administrativas, órganos desconcentrados y órganos que se encuentren en el ámbito de la Fiscalía General de la República, así como de las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, continuarán vigentes por el periodo para el cual fueron designados o hasta la conclusión en el ejercicio de la función o, en su caso, hasta la terminación del proceso pendiente.

Cuarto. La persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera.

En tanto se expiden los Estatutos y normatividad, continuarán aplicándose las normas y actos jurídicos que se han venido aplicando, en lo que no se opongan al presente Decreto.

Los instrumentos jurídicos, convenios, acuerdos interinstitucionales, contratos o actos equivalentes, celebrados o emitidos por la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República se entenderán como vigentes y obligarán en sus términos a la Institución, en lo que no se opongan al presente Decreto, sin perjuicio del derecho de las



partes a ratificarlos, modificarlos o rescindirlos posteriormente o, en su caso, de ser derogados o abrogados.

...
Sexto. El conocimiento y resolución de los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto o que se inicien con posterioridad a éste, corresponderá a las unidades competentes, en términos de la normatividad aplicable o a aquellas que de conformidad con las atribuciones que les otorga el presente Decreto, asuman su conocimiento, hasta en tanto se expiden los Estatutos y demás normatividad derivada del presente Decreto.

En relación con el artículo 97 del Decreto en mención, que señala:

**TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CAPÍTULO ÚNICO
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN**

Artículo 97. Las bases de datos, sistemas, registros o archivos previstos en la presente Ley que contengan información relacionada con datos personales o datos provenientes de actos de investigación, recabados como consecuencia del ejercicio de las atribuciones de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General o por intercambio de información con otros entes públicos, nacionales o internacionales, podrán tener la calidad de información reservada o confidencial, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuyo caso únicamente podrán ser consultadas, revisadas o transmitidas para los fines y propósitos del ejercicio de las facultades constitucionales de la Fiscalía General, por las personas servidoras públicas previamente facultadas, salvo por aquella de carácter estadístico que será pública.

Lo anterior, en correlación con los artículos 1, 3 y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el **Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia** de la Procuraduría General de la República, que señalan:

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y el funcionamiento de la Procuraduría General de la República para el despacho de los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley Orgánica y otros ordenamientos encomiendan a la Institución, al Procurador General de la República y al Ministerio Público de la Federación.

Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría, de su Titular y del Ministerio Público de la Federación, **la Institución contará con las unidades administrativas** y órganos desconcentrados siguientes:

...
Cada Subprocuraduría, la Oficialía Mayor, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Visitaduría General, cada Órgano Desconcentrado y **cada unidad administrativa especializada creada mediante Acuerdo del Procurador** contará con una coordinación administrativa que se encargará de atender los requerimientos de operación de las áreas bajo su adscripción, lo cual incluye la gestión de **recursos financieros, materiales y humanos**.

...
Artículo 6. Las facultades de los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, **se ejercerán por su conducto y por el personal a su cargo, de conformidad con las normas aplicables y lo que establezca el Procurador**.



La comunicación, actividades y flujo de información de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos, digitales u otra tecnología, de conformidad con los lineamientos que dicte el Procurador.

De lo expuesto, se concluye que en tanto **no se defina el nuevo estatuto de Fiscalía General de la República**, el Comité de Transparencia con el fin de seguir cumplimentando las obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables en la materia, el citado Órgano Colegiado continuará sesionando conforme lo establece el ya citado Acuerdo A/072/16.

Atento a lo anterior, cualquier referencia a la entonces Procuraduría General de la República, se entenderá realizada a la ahora Fiscalía General de la República.

Por otra parte, es importante puntualizar que con motivo de la emergencia sanitaria a nivel internacional, relacionada con el evento extraordinario que constituye un riesgo para la salud pública a través de la propagación del virus SARS-COVID2 y que potencialmente requiere una respuesta coordinada, es que desde el pasado viernes 20 de marzo en cumplimiento con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, se emitió el protocolo y medidas de actuación en la Fiscalía General de la República, por la vigilancia epidemiológica del Coronavirus COVID-19 para la protección de todas y todos sus trabajadores a nivel nacional y público usuario, en el sentido de que en la medida de lo posible se dé continuidad operativa a las áreas sustantivas y administrativas de esta institución, tal como se aprecia en el portal institucional de esta Fiscalía:

<https://www.gob.mx/fgr/articulos/protocolo-y-medidas-de-actuacion-ante-covid-19?idiom=es>

En ese contexto, en atención al Protocolo y medidas de actuación que han sido tomadas en cuenta por diversas unidades administrativas de la Fiscalía General de la República con motivo de la pandemia que prevalece en nuestro país, documentos emitidos el 19 y 24 de marzo del año en curso, respectivamente, por el Coordinador de Planeación y Administración, es importante tomar en cuenta el contenido de lo del artículo 6, párrafo segundo del *Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República*, el cual señala que:

Artículo 6. Las facultades de los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, se ejercerán por su conducto y por el personal a su cargo, de conformidad con las normas aplicables y lo que establezca el Procurador.

La comunicación, actividades y flujo de información de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos, digitales u otra tecnología, de conformidad con los lineamientos que dicte el Procurador.

En concatenación, con el numeral cuarto, fracciones I y II del Oficio circular No. C/008/2018, emitido por la entonces Oficina del C. Procurador, a saber:

CUARTO. Se les instruye que **comuniquen al personal adscrito o bajo su cargo que implementen, en el ejercicio de sus funciones, las siguientes directrices:**



I. Emplear mecanismos electrónicos de gestión administrativa para minimizar el uso de papel y fomentar la operatividad interna en un menor tiempo de respuesta;

II. Priorizar el uso de correos electrónicos como sistema de comunicación oficial al interior de la Institución;

...

Así como lo escrito en el **Acuerdo por el cual se establece el procedimiento de atención de solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales prioritarias en donde se amplíe el término para dar respuesta** signado por el Comité de Transparencia en su Novena Sesión Ordinaria 2019 de fecha 5 de marzo de ese año y el **Procedimiento para recabar o recibir información en la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental (UTAG), susceptible de revisión por parte del CT** aprobado por ese Colegiado el fecha 22 de junio de 2018, a través del cual se instituyeron diversas medidas de atención, entre las cuales, destaca el siguiente: "5. Que excepcionalmente, se recibirán correos electrónicos enviados en tiempo y forma fundados y motivados, como adelanto a sus pronunciamientos institucional", es que, el personal de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, únicamente gestionará a través de correos electrónicos institucionales, hasta nuevo aviso, todos y cada uno de los trámites, procedimientos y demás medios de impugnación establecidos en la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* y demás normativa aplicable, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos, así como procedimientos de investigación y verificación, de imposición de sanciones y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, así como diversos asuntos competencia de esta Unidad en la medida en que sus posibilidades técnicas, materiales y humanas lo permitan, hasta en tanto, no se tenga un comunicado por parte de las autoridades sanitarias que fomenten el reinicio de las actividades de manera presencial.

INTEGRANTES

Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la presidente del Comité de Transparencia.

En términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/072/2016 por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el artículo 64, párrafo cuarto, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF., 9.V.2016).



Lic. Carlos Guerrero Ruíz.

Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y responsable del Área Coordinadora de Archivos en la Fiscalía General de la República.

En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VII y 66, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, párrafo cuarto, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina.

Suplente del Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República.

En términos de lo dispuesto en el ACUERDO A/OIC/001/2022 por el que se distribuyen las facultades del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República entre sus Unidades Administrativas y se establecen las reglas para la suplencia de su titular, en relación con el artículo 64, párrafo cuarto, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Siendo las 13:51 de fecha 2 de diciembre de 2022, la Secretaría Técnica del Comité, remitió vía electrónica a los enlaces de transparencia, en su calidad de representantes de las Unidades Administrativas (UA) competentes, los asuntos que serán sometidos a consideración del Comité de Transparencia en su Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria 2022 a celebrarse el día 6 de diciembre de 2022, por lo que requirió a dichos enlaces, para que de contar con alguna observación al respecto, lo hicieran del conocimiento a esta Secretaría Técnica y que de no contar con un pronunciamiento de su parte, se daría por hecho su conformidad con la exposición desarrollada en el documento enviado.

Lo anterior, con el fin de recabar y allegar los comentarios al Colegiado, a efecto de que cuente con los elementos necesarios para emitir una determinación a cada asunto.

En ese contexto, tras haberse tomado nota de las observaciones turnadas por parte de las UA, la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia notificó a los integrantes del Comité de Transparencia la versión final de los asuntos que serían sometidos a su consideración, con las respectivas propuestas de determinación.

Derivado de lo anterior, tras un proceso de análisis a los asuntos, los integrantes del Comité de Transparencia emitieron su votación para cada uno de los casos, por lo que, contando con la votación de los tres integrantes de este Colegiado, la Secretaría Técnica del Comité, oficializó tomar nota de cada una de las determinaciones, por lo que procedió a realizar la presente acta correspondiente a la **Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria 2022**.



DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

- I. **Lectura y en su caso aprobación del orden del día.**
- II. **Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.**
- III. **Análisis y resolución de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de datos personales:**
 - A. **Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de reserva y/o confidencialidad de la información requerida:**

A.1. Folio 330024622003428

- B. **Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de reserva y/o confidencialidad de la información requerida:**

B.1. Folio 330024622003310
B.2. Folio 330024622003327
B.3. Folio 330024622003328
B.4. Folio 330024622003359
B.5. Folio 330024622003367
B.6. Folio 330024622003380
B.7. Folio 330024622003400
B.8. Folio 330024622003401
B.9. Folio 330024622003421

- C. **Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de la documentación requerida:**

C.1. Folio 330024622003399
C.2. Folio 330024622003507

- D. **Solicitudes en las que se analiza la ampliación de plazo de la información requerida:**

D.1. Folio 330024622003359
D.2. Folio 330024622003362
D.3. Folio 330024622003363
D.4. Folio 330024622003364
D.5. Folio 330024622003365
D.6. Folio 330024622003368
D.7. Folio 330024622003369
D.8. Folio 330024622003372
D.9. Folio 330024622003376
D.10. Folio 330024622003382
D.11. Folio 330024622003383
D.12. Folio 330024622003385
D.13. Folio 330024622003387
D.14. Folio 330024622003391
D.15. Folio 330024622003392
D.16. Folio 330024622003394



- D.17. Folio 330024622003397
D.18. Folio 330024622003398
D.19. Folio 330024622003399
D.20. Folio 330024622003402
D.21. Folio 330024622003404
D.22. Folio 330024622003408

E. Cumplimiento a las resoluciones del INAI:

- E.1. Folio de la solicitud 330024622002489 – RRA 15841/22
E.2. Folio de la solicitud 33002462200161721 – RRD 1347/21

IV. Asuntos generales

PUNTO 1.

- **Mensaje de la Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la presidente del Comité de Transparencia.**

[illegible]



ABREVIATURAS

FGR – Fiscalía General de la República.

OF – Oficina del C. Fiscal General de la República.

CA – Coordinación Administrativa

OM – Oficialía Mayor (antes CPA)

DGCS – Dirección General de Comunicación Social

CFySPC: Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera.

SJAI – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

CAIA – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

DGALEYN – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.

FECOR – Fiscalía Especializada de Control Regional (antes SCRPPA)

FEMDO – Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (antes SEIDO).

FECOC – Fiscalía Especializada de Control Competencial. (Antes SEIDF)

FEMCC – Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción

FEMDH – Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

FEVIMTRA – Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas.

FISEL – Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Antes FEDE)

FEAI – Fiscalía Especializada en Asuntos Internos.

FEADLE – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

AIC – Agencia de Investigación Criminal (antes CMI)

CENAPI – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

PFM – Policía Federal Ministerial.

CGSP – Coordinación General de Servicios Periciales.

OEMASC – Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

OIC: Órgano Interno de Control.

UTAG – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.

INAI – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

LFTAIP – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

CFPP – Código Federal de Procedimientos Penales

CNPP – Código Nacional de Procedimientos Penales.

CPEUM – Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.



I. Aprobación del orden del día.

II. Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.

III. Análisis y resolución de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de datos personales:

En seguimiento al desahogo del orden del día, la Secretaría Técnica de este Órgano Colegiado procede a tomar nota de las decisiones que manifestaron los integrantes del Comité de Transparencia para cada una de las solicitudes enlistadas en la presente sesión.

[illegible]



A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:

A.1. Folio de la solicitud 330024622003428

Síntesis	Video íntegro y la versión estenográfica del evento público celebrado el día 07 de abril de 2017, titulado "EVENTO DE INCINERACIÓN DE NARCÓTICOS/ PROGRAMA NACIONAL DE BODEGAS VACÍAS"
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Inexistencia

Contenido de la Solicitud:

"1. Se me remita copia del video íntegro y la versión estenográfica del evento público celebrado el día 07 de abril de 2017, titulado "EVENTO DE INCINERACIÓN DE NARCÓTICOS/ PROGRAMA NACIONAL DE BODEGAS VACÍAS", mismo que tuvo lugar en Morelia, Michoacán, con la participación del entonces Gobernador del Estado de Michoacán Silvano Aureoles Conejo y el entonces Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán Adrián López Solís.

2. Se me remita copia del video en el cual se observe la intervención íntegra del entonces Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán Adrián López Solís en el evento público celebrado el día 07 de abril de 2017, titulado "EVENTO DE INCINERACIÓN DE NARCÓTICOS/ PROGRAMA NACIONAL DE BODEGAS VACÍAS" mismo que tuvo lugar en Morelia, Michoacán." (Sic)

Datos complementarios:

"Extractos del evento solicitado se encuentran visibles en las siguientes páginas web:

<https://www.youtube.com/watch?v=i6MAZGuffzg>

<https://www.notivideo.com/noticia/nota,13523/titulo,Grupos+delictivos+inmersos+en+las+luchas+ind%C3%ADgenas:+SAC/>" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FECOR y DGCS.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0740/2022:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia



confirma la inexistencia de la información peticionada en los puntos 1 y 2 de la solicitud, consistente en el video íntegro y versión estenográfica del evento público celebrado el día 07 de abril de 2017, titulado "EVENTO DE INCINERACIÓN DE NARCÓTICOS/ PROGRAMA NACIONAL DE BODEGAS VACÍAS", así como del video en el cual se observe la intervención íntegra del entonces Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán Adrián López Solís en el citado evento; lo anterior, de conformidad con lo previsto en el **artículo 141** de la LFTAIP, en relación con los **Criterios de Interpretación SO/14/17 y SO/04/19**, emitidos por el INAI.

Inexistencia. La inexistencia es una cuestión de hecho que se atribuye a la información solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujeto obligado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla.

Propósito de la declaración formal de inexistencia. El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga constar esa declaración formal de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.

Lo anterior, en virtud de que la Delegación Michoacán señaló que derivado de una búsqueda en los archivos informáticos de dicha unidad, **no encontró registro del video y versión estenográfica del evento de incineración celebrado el 7 de abril de 2017.**

Sin embargo, en principio de máxima publicidad, la DGCS señaló que después de realizar una búsqueda exhaustiva, informó que localizó el comunicado de prensa número 636/17, emitido el 7 de abril de 2017, al que se le anexaron 3 fotografías, relativas al tema que se solicita, tal y como se muestra, en el siguiente extracto de imagen de dicho documento, por lo que se instruye a la UTAG a proporcionar el mismo al peticionario.





B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de reserva y/o confidencial de la información requerida:

B.1. Folio de la solicitud 330024622003310

Síntesis	731 denuncias federales por corrupción presentadas por dependencias federales
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Buenas tardes, en atención al artículo publicado en revista Proceso por Guillermo Rivero, sobre el caso de las **731 denuncias federales por corrupción presentadas por dependencias federales**, me permito solicitar en versión pública la denuncia que presentó la Secretaría de la Función Pública a la Fiscalía, en la que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, emitieron sentencia en contra de un funcionario de la presidencia; así como, todos los documentos de trabajo que se generaron durante su trámite; es decir desde la presentación hasta la emisión de la sentencia." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEMCC**.

ACUERDO

CT/ACDO/0741/2022:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de la información requerida, en términos del **artículo 110, fracciones XII y XIII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a la clasificación subsistan; así como **artículo 113, fracción I** del mismo ordenamiento legal.

Lo anterior, toda vez que, la Fiscalía Especializada competente manifestó lo siguiente:

"[...]

En su solicitud, el peticionario requiere conocer documentos (específicamente, la versión pública de una denuncia y los documentos de trabajo que se generaron durante su trámite) pertenecientes a una



carpeta de *investigación* a cargo de esta FEMCC en la que se emitió una *sentencia condenatoria*.

No pasa desapercibido para esta FEMCC que el art. 112, frac. II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIIP) señala una condición bajo la que no podrá reservarse información:

Artículo 112. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando:

I.)

II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

Es decir, de acuerdo con la norma citada, no se podrá reservar información relacionada con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables. Por lo tanto, la aplicabilidad de ese artículo depende de determinar:

1. Si el asunto de interés en la presente solicitud de información se relaciona con actos de corrupción, de acuerdo con las leyes aplicables.
2. En caso afirmativo, cuál de la información que esté bajo resguardo de esta FEMCC es la que permite llegar a la afirmación jurídica de que el asunto se relaciona con actos de corrupción.

¿Cómo responde la FEMCC a las preguntas anteriores?

En primer lugar, cabe subrayar que, con fundamento en el art. 13, frac. V de la Ley de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción es el área competente de la Fiscalía General de la República para investigar y perseguir los delitos por contenidos en el Libro Segundo, Título Décimo del Código Penal Federal. Es decir, **esta FEMCC tiene la facultad de investigar y perseguir penalmente las conductas que pudieran ser constitutivas de delitos por hechos de corrupción.**

Al ser parte de la autoridad que investiga y persigue penalmente conductas posiblemente constitutivas de delitos, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) es la norma procesal penal que debe seguir la FEMCC en el cumplimiento de sus atribuciones. El art. 211 del CNPP dispone que el procedimiento penal corresponde las siguientes etapas:

- I. **La de investigación**, que comprende las fases de: a) Investigación inicial, comenzando con la presentación de la denuncia, querrela o requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule la imputación; b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;
- II. **La intermedia o de preparación del juicio**, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y,
- III. **La de juicio, inicia con la audiencia de debate donde se desahogan las pruebas y concluye con la sentencia** que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.

Con ese marco jurídico como referencia, **se obtiene la certeza jurídica de que se realizó un acto de corrupción únicamente cuando se cumplen en su totalidad las siguientes condiciones:**

- Que se **inicie una investigación** por posibles delitos por hechos de corrupción.
- Que **se formule la acusación y se vincule a proceso penal** ante la autoridad judicial.
- Que se desahoguen todas las etapas del proceso penal ante la autoridad judicial hasta la **culminación del juicio oral con una sentencia condenatoria.**

A continuación, se presenta un análisis de esas condiciones para el asunto de interés en la presente solicitud de información, a fin de determinar si, al tratarse de un acto de corrupción, hay información que no pueda reservarse (y, en ese caso, cuál información), siempre de acuerdo con las leyes aplicables.

1. **Se inició una investigación por posibles delitos por hechos de corrupción. Sin embargo, la ley establece que la información de carpetas de investigación está reservada, los documentos de trabajo no se relacionan con hechos de corrupción y podrían incluir información confidencial.**



La FEMCC cuenta con una carpeta de investigación por conductas posiblemente constitutivas de uno de los delitos del Libro Segundo, Título Décimo del CPF relacionada con los hechos que son de interés del peticionario. Con fundamento en el art. 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público de la Federación tiene, entre otras, las atribuciones de:

Artículo 40. Son facultades de las personas agentes del Ministerio Público de la Federación las siguientes:

- I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal;
- II. Promover la pronta, expedita y debida procuración de justicia;
- III. Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito;
- IV. Iniciar con eficiencia, puntualidad y eficacia la investigación que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo 131, fracción V, del Código Nacional, cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito;
- [...]

En ese sentido, la información que se encuentre en carpetas de investigación (que, se reitera, es donde está la información de interés del peticionario) es total responsabilidad del Ministerio Público, por lo que es esta autoridad ministerial la que puede pronunciarse al respecto. Por lo tanto, se debe señalar que, en diversos lugares, dispone una imposibilidad jurídica para entregar la información requerida.

a) La información y documentos de carpetas de investigación están reservados, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

El art. 218 del CNPP dispone la **estricta reserva de los registros de la investigación, incluyendo todos los documentos que se le relacionen** (entre los que están la denuncia y los documentos de trabajo que son del interés del peticionario). La única forma para acceder a ellos es que la solicitante sea parte en el proceso penal, con las limitaciones legalmente establecidas. El acceso a los registros de carpetas está restringido para cualquier otra persona.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIPI) reconoce estas limitaciones al señalar en su art. 110, frac. XII y XIII que podrá reservarse la información que:

Art. 110.

XII. Se encuentre dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidas en la Ley General y esta Ley y no los contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

Estos dos supuestos se actualizan en relación con la solicitud de la versión pública de una la denuncia y documentos de trabajo de una carpeta de investigación en particular. **En primer lugar, se trata de información que obra en una carpeta de investigación tramitada ante el Ministerio Público. En segundo lugar, conforme a lo señalado arriba, el CNPP, que es la legislación en la materia, estipula que esa información está reservada.**

Las disposiciones antes citadas son obligatorias para todos los servidores públicos de este órgano autónomo, ya que, en caso de incumplimiento, se configuraría el tipo penal previsto en la fracción XXVIII del artículo 225 del Código Penal Federal, delito cometido contra la administración de justicia en su modalidad de dar a conocer a quien no tenga derecho documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales. **Igualmente, se estaría violando la Ley de la Fiscalía General de la República, art. 47, frac. IV,** que señala como una de las obligaciones de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General el preservar el secreto, la reserva y la confidencialidad, en términos de las disposiciones aplicables, de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan.

La información requerida se ubica puntualmente en ambos supuestos.



Más aún, el último párrafo del señalado art. 218 del CNPP establece las únicas hipótesis en las que se puede publicar información que pertenece a carpetas de investigación:

"[...] Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar **una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal**, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, **siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate**, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme."

Dado que la carpeta a la que se alude en la solicitud no cuenta con determinación de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o aplicación de criterio de oportunidad, no se actualiza alguno de los supuestos bajo los que la norma procesal permite entregar información perteneciente a carpetas de investigación en atención a solicitudes de acceso a la información.

La reserva señalada en la ley aplicable para la información requerida es de interés público. El art. 20 de la Constitución dispone que el objeto del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por los delitos se reparen. El art. 21 de la Constitución señala que el Ministerio Público tiene la función de la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales. Esta obligación es correlativa a y condición sin la cual no se puede acceder a la administración de justicia ni se puede alcanzar el objeto del proceso penal, lo cual es de interés público. Publicar la información requerida en la solicitud impediría que el Ministerio Público cumpliera con su función constitucional y, por lo tanto, afectaría el interés público. **Por eso, se reitera, la LFTAIP reconoce como dos causales de reserva de información la que se encuentre en carpetas de investigación y la que, por ley tenga tal carácter (en este caso, el CNPP).**

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su acción de inconstitucionalidad 49/2009, señaló que la reserva de información de investigaciones ministeriales en curso resulta razonable y se justifica en dos supuestos. Primero, cuando se pongan en riesgo investigaciones en curso. Como se señaló arriba, este supuesto se actualiza. Segundo, cuando se ponga en riesgo la seguridad de las personas. Lo anterior, en atención a que la propia Constitución establece el derecho a la protección de datos personales, el deber de sigilo a cargo del Ministerio Público y de reserva de información relativa a las investigaciones, así como la obligación de garantizar la protección de los sujetos involucrados en la indagatoria de los delitos.

En su tesis 1a. XLIV/2021 (10a.), la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que los parámetros legislativos para determinar si una información es de interés público, de acuerdo con lo previsto en el art. 3, frac. XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son: a) que sea relevante o beneficiosa para la sociedad y no, simplemente, de interés individual; y, b) Su divulgación debe ser útil para que el público comprenda las actividades llevadas a cabo por los sujetos obligados. La divulgación de información de una carpeta a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción es contraria al interés público. Considerando el daño que se causaría con su divulgación (que ponga en riesgo la investigación, no se pueda ejercer acción penal y, así, no se castigue a los culpables, no se reparen los daños y continúe el impedimento en el ejercicio de ciertos derechos), la sociedad obtiene un beneficio mayor en que esa información no se difunda y en que continúe la investigación con el sigilo que se marca en la Constitución y en las leyes de acceso a la información y del proceso penal. Adicionalmente, hay otros medios menos onerosos para que el Ministerio Público cumpla con su función constitucional, como estrategias de comunicación social y divulgación de información estadística, para que la sociedad comprenda las actividades llevadas a cabo por los sujetos obligados.

Los documentos objeto de esta solicitud de información se encuentran en una carpeta de investigación a cargo de la FEMCC. Con fundamento en el art. 13, frac. V de la Ley de la Fiscalía General de la República, esta Fiscalía Especializada es competente para la investigación de los delitos por hechos de corrupción, tipificados en el Libro Segundo, Título Décimo del Código Penal Federal. Estos delitos se distinguen de otros por, al menos, dos características: que, en su mayoría, participan servidores públicos en su comisión y que, en muchas ocasiones, la víctima es el Estado o la sociedad en su conjunto. Aunque no siempre haya una víctima clara, directa e identificable de los delitos por



hechos de corrupción, uno de sus efectos más evidentes es que impiden el ejercicio de otros derechos. En su prefacio a la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, desarrolló esa idea:

"La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. [...]"

Es decir, la corrupción es un fenómeno sistémico que afecta a los Estados y a las sociedades. Aunque esta investigación en particular haya concluido y se cuente con una sentencia, las conductas en particular, las personas involucradas, sus colaboradores o testigos podrían estar relacionados con otras investigaciones a cargo de esta misma FEMCC o de otras áreas de la Fiscalía General de la República. Por lo tanto, **entregar información se este asunto puede afectar el debido sigilo imprescindible en otras investigaciones en curso cercanas a la que es objeto de la solicitud de información.** Además, al no estar firme la sentencia, **la entrega de información sobre la investigación podría representar una violación al debido proceso de la persona imputada o una revictimización de los afectados.** La gravedad de estos factores **eventualmente podría llevar a la anulación del proceso penal.** De este modo, se obstaculizaría el ejercicio de los derechos señalados en los art. 20 y 21 de la Constitución.

Por lo tanto, aunque sí hay una carpeta de investigación por posibles delitos por hechos de corrupción, la ley impide que se haga pública, lo que se reconoce en la propia legislación de transparencia.

b) La denuncia y los documentos de trabajo no se relacionan con actos de corrupción.

El último párrafo del art. 261 del CNPP establece que:

"[...]

Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llevar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación".

Sólo es prueba aquélla que se produce en juicio. Es decir, la sentencia sólo puede motivarse a partir de los elementos vertidos en evidencia pública ante el juez. **La prueba debe desahogarse durante la audiencia** y que la prueba **sirve al Tribunal para concluir que ciertos hechos ocurrieron.** En el art. 402 del CNPP se reitera que **la convicción del Tribunal debe sostenerse en las pruebas que se presenten en el juicio.**

Es necesario observar que el art. 385 del mismo ordenamiento jurídico indica que:

"No se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el debate, a los registros y demás documentos que den cuenta de actuaciones realizadas por la Policía o el Ministerio Público en la investigación, con excepción de los supuestos expresamente previstos en este Código.
[...]"

Esto indica que los documentos de trabajo que obren en la carpeta posterior a la denuncia -que es lo que el peticionario solicita- no son medios de prueba del acto de corrupción. En consecuencia, éstos no sirven para probar un acto de corrupción ya que sólo es prueba lo que se comunique en juicio al juez mediante testigos y otros medios de prueba lícitos. Por lo tanto, el juez no los considera al emitir su sentencia sobre los hechos puestos a su consideración. Reiterando que sólo puede decirse que la información relacionada con hechos de corrupción es aquélla que las partes



informan al juez en audiencia, **al haber una disposición que impide que el juez conozca los documentos de trabajo de una carpeta de investigación, se subraya que esos documentos no se relacionan con el acto de corrupción (entendido como aquél determinado por un juez en audiencia).**

Más aún, el asunto de interés para el peticionario **no se desahogó en juicio, sino que concluyó mediante procedimiento abreviado.** La implicación más importante de esta diferencia es que, en este caso, el juez no hizo una valoración de las pruebas ni emitió una determinación sobre los hechos que se consideraran probados. De este modo, si ni siquiera en un juicio oral el juez conoce ni emite un pronunciamiento sobre los documentos de trabajo, menos aún en un procedimiento abreviado, donde la autoridad jurisdiccional no hace una valoración sobre el fondo del asunto ni el caudal probatorio del Ministerio Público (entre lo que nunca se encuentran los documentos de trabajo de una carpeta de investigación).

c) La información requerida podría contener datos personales, que son confidenciales de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia.

La denuncia y los documentos de trabajo requeridos por el solicitante podrían contener datos personales del imputado y de terceros (como familiares, conocidos, testigos, víctimas, colaboradores o proveedores de información). Entre estos datos estarían nombre, domicilio particular, cuentas bancarias, activos financieros, bienes muebles, bienes inmuebles, relaciones de parentesco, teléfonos, correos electrónicos o firma. Todos esos datos harían al imputado y terceros identificados o identificables. Con fundamento en el art. 113, frac. I de la LFTAIP, esos datos son confidenciales.

Artículo 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene **datos personales concernientes a una persona física** identificada o identificable;

Asimismo, este precepto legal establece que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de ésta, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello.

En el mismo sentido, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas, disponen lo siguiente:

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;

[...]

Trigésimo noveno. Los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, no podrán clasificarse como confidenciales ante sus titulares.

Se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga **datos personales de una persona física identificada o identificable**, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que **sólo podrán tener acceso los titulares de la información** o sus representantes legales.

Por tal motivo, se insiste que dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna denuncia, imputación, procedimiento relacionado con la comisión de delitos **afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre.** Incluso, **vulnera la presunción de inocencia** al generar un juicio a priori por parte de la sociedad sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia.

Al efecto, se debe considerar que dichos **derechos están constitucional e internacionalmente reconocidos**, conforme los **artículos 1° y 6°** de nuestra Constitución, de donde se desprende que **toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada** y todo lo que esto conlleva, así como al normal desarrollo de su personalidad, por lo que, inclusive, el artículo 6° apartado A, fracción II Constitucional prevé expresamente:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, **sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros,**



provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

[...]

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Aunado a esto, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), específicamente en su artículo 15, dispone que **cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como parte en el procedimiento penal**, a saber:

Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad **de cualquier persona que intervenga en él**, asimismo se protegerá la información que se refiere a la **vida privada y los datos personales**, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información **tiene límites**, los cuales aplican en el momento en que se afectan el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas. Además, define la afectación a la moral como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO. [...] Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.¹⁴

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, [...] en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público. [...].¹⁵

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del **secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático"**. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, **el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera**; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, **mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados**.¹⁶

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé:

Artículo 12. **Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.** Toda persona tiene derecho a la protección de



la ley contra tales *injerencias* o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señala:

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- **Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.**
- 2.- **Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.**
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece:

Artículo 17.

1. **Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.**
 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
2. **Dado que el asunto se judicializó y la autoridad ministerial se convirtió en parte, se encuentra imposibilitada para entregar información al respecto, facultad que correspondería al Poder Judicial de la Federación.**

En adición a lo señalado en el punto anterior, es necesario señalar que, como la acusación y los datos de prueba expuestos en el procedimiento **se presentaron ante el Poder Judicial como parte de un proceso penal en el que esta FEMCC es parte, es esa autoridad -y ya no esta Fiscalía Especializada- la responsable de su debido resguardo.**

Al respecto, es pertinente recuperar el art. 5 del CNPP. Éste determina que todas las audiencias serán públicas, con las excepciones previstas en el multicitado Código, y que, de conformidad con el art. 44 del CNPP, las actuaciones procesales **se realizan de forma oral mediante audiencia en las instalaciones del propio Órgano Jurisdiccional, quedando únicamente en resguardo de esa autoridad** el material que da cuenta de ello. Esto es porque el art. 61 del referido Código prevé que todas las audiencias serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición, incluso, la grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considera como parte de las actuaciones y registros y se conservarán bajo su resguardo.

Así, la autoridad judicial es a **quien única y exclusivamente le corresponde pronunciarse sobre procesos penales**, toda vez que, **a partir de que se pone al imputado a disposición del Juez de Control esta Fiscalía General de la República, a través del agente del Ministerio Público de la Federación, deja de tener control de la investigación; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se convierte en parte.**

Por lo tanto, **concluida la investigación inicial, las actuaciones del agente del Ministerio Público de la Federación, ahora se encuentran bajo la potestad de la autoridad jurisdiccional, siendo por ello que a esta, le corresponde determinar lo relativo a la publicidad de cualquier información relacionada con el proceso penal**, a fin de salvaguardar los derechos humanos de las personas involucradas, el principio de igualdad entre las partes, el del debido proceso, el de presunción de inocencia, el de intimidad y privacidad de las personas que intervienen en el procedimiento penal.

Siendo por todo lo anterior que, por lo que respecta a esta Fiscalía General de la República, a través **del agente del Ministerio Público de la Federación, en su calidad de parte, no se cuenta con la facultad de autorizar y entregar información relativa al proceso penal**, observando lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 15, 105, 106, 109, fracción XXII, 131, 134, fracción III, y 218 del CNPP, ya que debe atender estrictamente a la reserva de los registros de la investigación, objetos, imágenes o cosas que le estén relacionados, independientemente de su contenido o naturaleza, a personas que no se encuentre legitimadas.

Refuerza lo anterior, lo dispuesto por los artículos 44 y 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé que las audiencias se desarrollan de forma oral y se forman carpetas digitales o expedientes electrónicos de los que el agente del Ministerio Público de la Federación no posee su titularidad, ni jurisdicción sobre éstas, sino exclusivamente al órgano jurisdiccional.



Por todas las consideraciones anteriores y toda vez que se argumentó que la información que se relaciona con actos de corrupción es la que la autoridad ministerial presenta ante la autoridad jurisdiccional durante la etapa de juicio que concluye con una sentencia condenatoria, **se advierte que el Poder Judicial de la Federación es la autoridad que puede entregarla.**

Por tanto y con fundamento en el artículo 130, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le orienta a dirigir su petición ante el **Consejo de la Judicatura Federal o los Consejos de la Judicatura de los Estados**, accediendo a la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la siguiente liga electrónica:

<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>

Los datos de referencia para solicitar la información requerida son los siguientes:

- Causa penal: 27/2020
- Juzgado: Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente.
- Fecha de la sentencia: 21 de junio de 2021

A continuación, se presentan las pruebas de daño sobre la clasificación de la información en términos de lo expuesto en el primer punto de la presente respuesta:

i. LFTAI, art. 110, frac. XII

a. Riesgo real, demostrable e identificable. Publicar información sobre carpetas de investigación, en este caso específicamente sus documentos de trabajo, impide que el Ministerio Público alcance su fin constitucionalmente válido y de interés general de investigar delitos y, con ello, que se alcancen los objetivos del proceso penal: permitir el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por los delitos se reparen.

La relevancia de la reserva los documentos se debe primordialmente a que el cumplimiento de esta obligación constitucional del Ministerio Público es el medio por el cual se permite cumplir con el derecho humano de acceso a la justicia -igualmente reconocido en la Constitución- y todo lo que conlleva: esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar los daños causados por el delito.

Si se publicara la información requerida se correrían diversos riesgos. El principal de ellos es que se revelaría ante la sociedad en general (incluyendo personas que cometen delitos) todo el detalle y la minucia del actuar ministerial. Es decir, permitiría observar todas las diligencias que se llevan a cabo para integrar una carpeta. De este modo, se daría a conocer la hipótesis delictiva que se sigue, el plan de investigación y las capacidades operativas del Ministerio Público. Aunque podría argumentarse que esto contribuye a un mejor conocimiento ciudadano sobre el actuar de las autoridades, también es cierto que de ese mismo modo se harían ver las debilidades, posibles errores y amenazas a la actividad del Ministerio Público. Dado que la información entregada en el marco del ejercicio del derecho de acceso a la información queda disponible para la sociedad en general, las personas relacionadas con la comisión de delitos podrían aprovechar las debilidades, errores y amenazas señaladas previamente para ocultar sus actos ilegales y entorpecer o, de plano, impedir la investigación de los delitos, con lo que se obstaculiza el ejercicio del derecho de acceso a la justicia.

Además, dado que la corrupción es un fenómeno sistémico, que afecta al Estado en su conjunto, revelar todos los documentos de trabajo tendría un impacto negativo en la integración de otras carpetas de investigación en trámite en esta FEMCC o en otras áreas de la Fiscalía General de la República que guarden similitud con los hechos investigados en la que es de interés en esta solicitud de información o en la que estén involucrados los mismos imputados, colaboradores o testigos. Consecuentemente, esas personas podrían modificar, destruir u ocultar medios de prueba



que aún no **conoce** el Ministerio Público, obstaculizando la construcción de esas otras carpetas de investigación. Esas limitaciones podrían ser insalvables hasta el punto en que el Ministerio Público a cargo de esas investigaciones en curso o futuras tuviera que elaborar una nueva teoría del caso, recurrir a hipótesis delictivas adicionales, desarrollar nuevas líneas de investigación, y buscar medios de prueba, testigos o colaboradores alternativos. Todo esto representaría un notable retroceso de tiempo y un uso ineficiente de los recursos humanos, financieros y materiales que se hubieran utilizado en la integración de carpetas relacionadas con las personas o los hechos del asunto objeto de la presente solicitud. Incluso, dada la complejidad de los delitos que se investigan, existe la posibilidad de que no haya opciones adicionales de líneas de investigación o medios de prueba a los que se revelaran en la solicitud de información, lo que impediría de plano que el Ministerio Público continuara con su fin constitucionalmente válido de investigar delitos para contar con elementos para el ejercicio de la acción penal y permitir el acceso a la justicia a las víctimas del delito.

Finalmente, al revelar nombres de testigos, eventuales imputados y otros nombres de algún modo relacionados con o mencionados en la indagatoria, las personas quedarían sujetas a sufrir represalias de quienes hubieran cometido los actos investigados. Esto representaría riesgos a su integridad física o a su vida, y los haría potenciales víctimas de extorsión o sobornos.

Más aún, al no estar todavía firme la sentencia, si, resultado de que se recurriera esa determinación se ordenara la reapertura de la carpeta y se hubiera publicado la información, los involucrados eventualmente podrían alegar violaciones al debido proceso porque, con la divulgación de los documentos, se revelaría su vinculación con un posible hecho delictivo.

- b.** Perjuicio que supera el interés público. En el Dictamen en sentido positivo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Sistema Nacional Anticorrupción a cargo de la Cámara de Origen, se señala que (p. 32):

"Resulta evidente que la corrupción trasciende de militancias partidistas, proyectos ideológicos y órdenes de gobierno. La corrupción, como sostienen los estudios en la materia, ha logrado instaurarse en un sistema con capacidad de autorregularse y, por ende, de actualizar mecanismos de defensa frente a los esfuerzos gubernamentales por combatirla."

Dada esa urgencia, se determinó crear una fiscalía especializada para combatir penalmente la corrupción (p. 67):

"La Fiscalía en la materia estará a cargo de su investigación al dotar de las capacidades técnicas necesarias para desempeñar sus funciones. Cabe mencionar que en términos de la reciente reforma constitucional en materia político electoral que otorga autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República, la fiscalía especializada en combate a la corrupción, contará con el marco jurídico suficiente para investigar y perseguir de forma efectiva los delitos en esta materia."

Por lo tanto, **la sociedad en su conjunto es quien recibe los beneficios de que el Ministerio Público lleve a su término con el debido sigilo las investigaciones por delitos de corrupción y ejerza la acción penal. Estos beneficios, que llegan a la sociedad en general, incluyen la reparación de los daños que causa ese tipo de conductas y la recuperación del ejercicio de los derechos fundamentales que se hubieran frenado con esos delitos, sólo pueden alcanzarse al guardar la reserva de la información de las carpetas de investigación en trámite que marca la ley.**

- c.** Principio de proporcionalidad. El que la información esté reservada permite que el Ministerio Público cumpla con su fin constitucionalmente válido y, apegándose al principio de proporcionalidad, resulta el medio más idóneo para proteger los actos que conllevan alcanzar los fines del proceso penal.

La reserva de la información protege el fin constitucionalmente válido del Ministerio Público, que es correlativo al derecho humano de acceso a la justicia y, de ese modo, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar los daños causados por el delito.



La reserva de la información de la carpeta de investigación requerida en la solicitud no implica una restricción del derecho de acceso a la información. Dada la naturaleza de esa información, su reserva es proporcional porque atiende la importancia de la protección del interés jurídico que se tutela con los delitos por hechos de corrupción (el funcionamiento normal y ordenado de la Administración Pública), de la correcta administración de justicia y del interés general que hay en que se cumpla el proceso penal en las investigaciones de este tipo de delitos, que permite, entre otras cosas, la reparación del daño y el establecimiento de garantías de no repetición. Además, es necesario reiterar que esta reserva se desprende de lo que establece el CNPP en su art. 218, en relación con la LFTAIP, art. 110, frac. XII. En suma, es claro que la investigación y persecución de los delitos por hechos de corrupción es de interés general. La divulgación de información de esas investigaciones ignoraría ese interés.

Por lo anterior, se advierte un nexo causal entre la entrega de la información requerida y afectaciones a la debida diligencia que rige el actuar del Ministerio Público y al interés general que se alcanza con él. Así, no hay justificación para vulnerar esos principios frente al derecho a la información del solicitante.

ii. LFTAIP, art. 110, frac. XIII

- a. *Riesgo real, demostrable e identificable. Publicar información sobre una carpeta de investigación, específicamente sus documentos de trabajo impide que el Ministerio Público alcance su fin constitucionalmente válido y de interés general de investigar delitos y, con ello, que se alcancen los objetivos del proceso penal: permitir el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por los delitos se reparen.*

La relevancia de la reserva de las carpetas de investigación se debe primordialmente a que el cumplimiento de esta obligación constitucional del Ministerio Público es el medio por el cual se permite cumplir con el derecho humano de acceso a la justicia -igualmente reconocido en la Constitución- y todo lo que conlleva: esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar los daños causados por el delito.

Al publicar la información requerida, en los hechos se daría acceso a carpetas de investigación a personas que no son parte del proceso penal, contrario a lo establecido en el art. 218 del CNPP. La principal consecuencia de esto es que el propio agente del Ministerio Público dejaría de tener certeza sobre sus acciones respecto esa carpeta de investigación, lo que impactaría negativamente en la posibilidad de continuar con el proceso penal. *Por ejemplo, se abriría la posibilidad de que el investigado, los declarantes o sus representantes legales lo demandaran por eventuales violaciones a sus derechos constitucionales como parte del proceso penal, incluyendo la presunción de inocencia, el que se le informe por la autoridad competente de los hechos que se le imputan, la oportunidad de presentar testigos y pruebas a su favor, o la facilitación de todos los datos que solicite para su defensa. En ese caso, el agente del Ministerio Público tendría que distraer su atención y tiempo de la investigación penal a su cargo para defenderse contra esos cargos. Asimismo, quienes hubieran presentado la denuncia, los testigos y otras personas que aportarían pruebas o indicios que se usaran en la investigación podrían dejar de querer colaborar porque sabrían que la información que proveyeran a la carpeta sería pública, potencialmente exhibiéndolos a ellos mismos y poniéndolos en una situación de riesgo. De este modo, el agente del Ministerio Público se encontraría con obstáculos para obtener medios de prueba que contribuyan a probar la hipótesis delictiva con la que trabaja. Así como resultados de técnicas de investigación que son requeridas con fin específico para la investigación y cuya posesión recaen en responsabilidad del Ministerio Público. En caso de que dichas técnicas de investigación fueran dadas a conocer, traería consigo consecuencias para el Ministerio Público y para la persona física o moral que es investigada.*

Adicionalmente, la revelación de datos de las carpetas podría llevar a que agentes del Ministerio Público se expusieran a cometer el delito previsto en el art. 225, frac. XXVIII del Código Penal Federal: Delitos contra la administración de justicia en su modalidad de dar a conocer a quien no tenga derecho documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean



reservados o confidenciales, tal como lo son las carpetas de investigación de acuerdo con el art. 218 del CNPP. Esto, además de eventuales faltas administrativas. Ante ello, igualmente tendrían que dejar de atender las carpetas para concentrarse en su defensa. Cualquiera de esas situaciones representa obstáculos para que el Ministerio Público continuara con su obligación constitucional de investigar delitos y, con ello, afectaría el ejercicio del derecho de acceder a la administración de justicia.

La publicación de la información requerida colocaría aún más obstáculos a la investigación de la carpeta, impidiendo de plano que el Ministerio Público cumpla con su función constitucional.

- b. *Perjuicio que supera el interés público. En el Dictamen en sentido positivo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Sistema Nacional Anticorrupción a cargo de la Cámara de Origen, se señala que (p. 32):*

"Resulta evidente que la corrupción trasciende de militancias partidistas, proyectos ideológicos y órdenes de gobierno. La corrupción, como sostienen los estudios en la materia, ha logrado instaurarse en un sistema con capacidad de autorregularse y, por ende, de actualizar mecanismos de defensa frente a los esfuerzos gubernamentales por combatirla."

Dada esa urgencia, se determinó crear una fiscalía especializada para combatir penalmente la corrupción (p. 67):

"La Fiscalía en la materia estará a cargo de su investigación al dotar de las capacidades técnicas necesarias para desempeñar sus funciones. Cabe mencionar que en términos de la reciente reforma constitucional en materia político electoral que otorga autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República, la fiscalía especializada en combate a la corrupción, contará con el marco jurídico suficiente para investigar y perseguir de forma efectiva los delitos en esta materia."

Por lo tanto, la sociedad en su conjunto es quien recibe los beneficios de que el Ministerio Público lleve a su término con el debido sigilo las investigaciones por delitos de corrupción y ejerza la acción penal. Estos beneficios, que llegan a la sociedad en general, incluyen la reparación de los daños que causa ese tipo de conductas y la recuperación del ejercicio de los derechos fundamentales que se hubieran frenado con esos delitos, sólo pueden alcanzarse al guardar la reserva de la información de las carpetas de investigación en trámite que marca la ley.

- c. *Principio de proporcionalidad. El que la información esté reservada permite que el Ministerio Público cumpla con su fin constitucionalmente válido y, apegándose al principio de proporcionalidad, resulta el medio más idóneo para proteger los actos que conllevan alcanzar los fines del proceso penal.*

La reserva de la información protege el fin constitucionalmente válido del Ministerio Público, que es correlativo al derecho humano de acceso a la justicia y, de ese modo, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar los daños causados por el delito.

La reserva de la información de la carpeta de investigación requerida en la solicitud no implica una restricción del derecho de acceso a la información. Dada la naturaleza de esa información, su reserva es proporcional porque atiende la importancia de la protección del interés jurídico que se tutela con los delitos por hechos de corrupción (el funcionamiento normal y ordenado de la Administración Pública), de la correcta administración de justicia y del interés general que hay en que se cumpla el proceso penal en las investigaciones de este tipo de delitos, que permite, entre otras cosas, la reparación del daño y el establecimiento de garantías de no repetición. Además, es necesario reiterar que esta reserva se desprende de lo que establece el CNPP en su art. 218, en relación con la LFTAIP, art. 110, frac. XIII. En suma, es claro que la investigación y persecución de los delitos por hechos de corrupción es de interés general. La divulgación de información de esas investigaciones ignoraría ese interés.



Por lo anterior, se advierte un nexo causal entre la entrega de la información requerida y afectaciones a la debida diligencia que rige el actuar del Ministerio Público y al interés general que se alcanza con él. Así, no hay justificación para vulnerar esos principios frente al derecho a la información del solicitante. [...]” (Sic) -----

Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria 2022



B.2. Folio de la solicitud 330024622003327

Síntesis	Carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADECDMX/0000380/2020
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada y confidencial

Contenido de la Solicitud:

*"Solicito en copia simple la versión pública de todas las actuaciones incluidas en la **carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADECDMX/0000380/2020** relativa a las denuncias presentadas contra el C. Pío López Obrador y el C. David Eduardo León Romero" (Sic)*

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FISEL**.

ACUERDO

CT/ACDO/0742/2022:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de la información requerida, en términos del **artículo 110, fracción XII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a la clasificación subsistan.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

De la Información Reservada

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

...

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésimo primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:



Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, **fracción XII** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se exponen las siguientes pruebas de daño:

- I. Es un riesgo real toda vez que, al dar a conocer la información solicitada por el particular se expondrían las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen los indicios para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar o no la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional competente, es un riesgo demostrable, ya que al otorgar la información solicitada se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República; y es un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con carpetas de investigación y al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
- II. Tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida por el particular vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés general, por lo que tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos.
- III. El reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública toda vez que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la protección del expediente de indagatoria, consistentes en la investigación y persecución de delitos, como los son las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo y la probable responsabilidad del indiciado, siendo dichas acciones orientadas al bienestar general de la sociedad, y no así a una determinada persona.



Aunado a los impedimentos normativos expuestos, esta Autoridad se encuentra imposibilitada para proporcionar la información, por lo establecido en el **artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal**:

"Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

XXVIII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales;

...

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones... XXVIII... se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa."

ACUERDO

CT/ACDO/0743/2022:

Por otro lado, este Órgano Colegiado ha determinado **confirmar** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o no de investigaciones en contra de las personas señaladas en la solicitud, en términos del **artículo 113, fracción I LFTAIP**.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una sentencia condenatoria irrevocable o sanción firme, divulgar que la persona aludida en la petición sea sujeta a líneas de investigación, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a la letra establece:

CAPÍTULO III

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y



III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

...

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona **física** o moral identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de responsabilidades penales y/o administrativas, y que no cuente con una sanción firme, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, ataquen la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias,



decoro, honor, **reputación**, vida privada, **configuración** y aspectos físicos, o bien, en la **consideración** que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la **persona**; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una **obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente**, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado



origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como 'reserva de información' o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona **física** identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la ésta, ya que se vulneraría su honor y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona moral ha sido sujeta a algún hecho posiblemente constitutivo de delito. - - - - -



B.3. Folio de la solicitud 330024622003328

Síntesis	Carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADECDMX/0000380/2020
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada y confidencial

Contenido de la Solicitud:

*"Solicito en copia simple todas las actuaciones incluidas en la carpeta de investigación **FED/FEPADE/FEPADECDMX/0000380/2020** relativa a las denuncias presentadas contra el C. Pío López Obrador y el C. David Eduardo León Romero" (Sic)*

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FISEL**.

ACUERDO

CT/ACDO/0744/2022:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de la información requerida, en términos del **artículo 110, fracción XII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a la clasificación subsistan.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

De la Información Reservada

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésimo primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:



Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, **fracción XII** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se exponen las siguientes pruebas de daño:

- I. Es un riesgo real toda vez que, al dar a conocer la información solicitada por el particular se expondrían las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen los indicios para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar o no la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional competente, es un riesgo demostrable, ya que al otorgar la información solicitada se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República; y es un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con carpetas de investigación y al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
- II. Tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida por el particular vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés general, por lo que tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos.
- III. El reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública toda vez que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la protección del expediente de indagatoria, consistentes en la investigación y persecución de delitos, como los son las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo y la probable responsabilidad del indiciado, siendo dichas acciones orientadas al bienestar general de la sociedad, y no así a una determinada persona.



Aunado a los impedimentos normativos expuestos, esta Autoridad se encuentra imposibilitada para proporcionar la información, por lo establecido en el **artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal**:

"Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

XXVIII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales;

...

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones... XXVIII... se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa."

ACUERDO
CT/ACDO/0745/2022:

Por otro lado, este Órgano Colegiado ha determinado **confirmar** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o no de investigaciones en contra de las personas señaladas en la solicitud, en términos del **artículo 113, fracción I LFTAIP**.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine su culpabilidad a través de una sentencia condenatoria irrevocable o sanción firme, divulgar que la persona aludida en la petición sea sujeta a líneas de investigación, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a la letra establece:

CAPÍTULO III

De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y**



III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

...

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona **física** o moral identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de responsabilidades penales y/o administrativas, y que no cuente con una sanción firme, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

*Tesis: I30.C. J/71 (9a.)
Décima Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tribunales Colegiados de Circuito
160425 1 de 3
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036*

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias,



decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I30.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. *El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.*

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. *El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado*



Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

l. A que se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona **física** identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la ésta, ya que se vulneraría su honor y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona moral ha sido sujeta a algún hecho posiblemente constitutivo de delito. - - - - -



B.4. Folio de la solicitud 330024622003359

Síntesis	Carpeta de investigación por el hecho tipificado como delito contra el Ambiente y la Gestión Ambiental
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Solicito **copia de la carpeta de investigación** que inició la Fiscalía Especializada de Control Regional en su Unidad Administrativa en **Baja California Sur**, en contra de quien resulte responsable, por el hecho tipificado como delito contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, derivado de una denuncia del departamento de asuntos Jurídicos de la Dirección Regional, Península de Baja California y Pacífico Norte, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (**CONANP**) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (**PROFEPA**). La denuncia fue interpuesta tras el hundimiento de la embarcación Fortius en el área de protección de flora y fauna en Balandra, Baja California Sur. Asimismo, solicito lo siguiente:

1. **Listado de las diligencias** que han sido realizadas por el agente del ministerio público desde que se inició la investigación a la fecha.
2. Copia del **dictamen de cuantificación del daño ambiental y propuesta de remediación** en el área natural protegida de que se trata.
3. Determinación del **monto** de la **reparación del daño**.
4. **Fecha en la que se inició la carpeta de investigación**.
5. **Número de carpeta de investigación**.
6. **Estatus** en que se encuentra.
7. **Amparos que han sido interpuestos.**" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias**.

ACUERDO

CT/ACDO/0746/2022:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de **reserva** de la información requerida, en términos del **artículo 110**,



fracciones XI, XII y XIII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a la clasificación subsistan.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

De la Información Reservada

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésimo primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como **información reservada**, aquella que vulnere **la conducción de los expedientes judiciales** o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:

- I. La **existencia de un juicio** o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y
- II. Que la información solicitada se refiera a **actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.**

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y
2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.

Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que **forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación** que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, **los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal.** la acusación contra el imputado y la reparación del daño.



Trigésimo segundo. De conformidad con el artículo 113, fracción XIII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que por disposición expresa de una ley o de un Tratado Internacional del que el Estado mexicano sea parte, le otorgue tal carácter siempre que no se contravenga lo establecido en la Ley General.

Para que se actualice este supuesto de reserva, los sujetos obligados deberán fundar y motivar la clasificación de la información, señalando de manera específica el supuesto normativo que expresamente le otorga ese carácter.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se exponen las siguientes pruebas de daño:

Artículo 110, fracción XI:

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable:** la divulgación de la información solicitada constituye un riesgo real y un riesgo demostrable, ya que el otorgar el acceso a los acuerdos reparatorios en donde las personas imputadas son miembros de las fuerzas armadas, SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional, **vulneraría los procesos penales**, así como las acciones y estrategias que pudieran desarrollar las partes involucradas, ya que al derivarse un asunto ante ese Órgano Especializado, la autoridad judicial puede canalizarlo con el fin de que, a través de algún mecanismo alternativo de solución de controversias se explore la posibilidad de dirimir de manera total o parcial la controversia, por lo que, con la celebración de un acuerdo reparatorio y su cumplimiento, las personas intervinientes pudieron haber resuelto solo parte del conflicto, aunado a que la resolución y la firmeza de los acuerdos reparatorios no es determinada por ese Órgano Especializado, sino por la autoridad judicial, por lo que el divulgar la información requerida podría vulnerar los procesos penales, así como las acciones y estrategias de las partes involucradas.
- II. **Perjuicio que supera el interés público:** la reserva manifestada supera el perjuicio de derecho de acceso a la información, el cual, no rebasa la obligación de esta Institución consistente en garantizar y proteger los derechos humanos y procesales de las personas, toda vez que la divulgación de los acuerdos reparatorios que se celebraron ante ese Órgano podría vulnerar los procesos penales de origen, el derecho que le asiste a las víctimas u ofendidos a que los daños causados se reparen, así como la garantía de presunción de inocencia que le asiste a todas las personas hasta en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un Juez, tal como establece el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- III. **Principio de proporcionalidad:** el reservar la información y/o documentos solicitados no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, toda vez que, por la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada y cuyos plazos y condiciones figuran explícitamente en la legislación, siendo obligación de esta Institución el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las



víctimas, personas ofendidas y personas imputadas; acciones que se encuentran orientadas al bienestar general de la sociedad y no así al de una determinada persona.

Artículo 110, fracción XII:

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable:** revelar los acuerdos reparatorios en donde las personas imputadas son miembros de las fuerzas armadas, SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional, perjudicaría las investigaciones a cargo de esta Fiscalía, así como las acciones y estrategias que pudieran desarrollar las partes involucradas, ya que, como se mencionó con anterioridad, al derivarse un asunto ante ese Órgano Especializado, la autoridad ministerial puede canalizarlo con el fin de que, a través de algún Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias se explore la posibilidad de dirimir de manera total o parcial la controversia, por lo que, con la celebración de un acuerdo reparatorio y su cumplimiento, las personas intervinientes pudieron haber resuelto solo parte del conflicto, aunado a que la resolución y la firmeza de los acuerdos reparatorios no es determinada por ese Órgano Especializado, por lo que el divulgar la información requerida podría vulnerar los procedimientos penales, así como las acciones y estrategias de las partes involucradas e incluso poner a éstas personas en riesgo.
- II. **Perjuicio que supera el interés público:** es pertinente señalar que dicha reserva supera el ejercicio de los particulares del derecho de acceso a la información, toda vez que la citada clasificación atiende a la protección de un interés jurídico superior para toda la sociedad, siendo que la atribución de investigación y persecución de un hecho posiblemente constitutivo de delito se traduce en un medio que permite dar cuenta de sus actividades mediante misión de cumplir de manera irrestricta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos.
- III. **Principio de proporcionalidad:** el reservar la información y/o documentos solicitados no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, toda vez que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la protección del expediente de indagatoria, así como de las acciones que pudieran agotar las partes del procedimiento penal para la reparación del daño y el esclarecimiento de los hechos, siendo dichas acciones orientadas al bienestar general de la sociedad y no así a una determinada persona.

Artículo 110, fracción XIII:

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable:** Divulgar la información solicitada supondría vulnerar la confidencialidad que rige a los mecanismos alternativos de solución de controversias como principio rector, el cual está establecido en el artículo 4, fracción III de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En ese sentido, entregar los acuerdos reparatorios que han sido producto del diálogo y la participación de la víctima u ofendido, así como de la persona imputada en algún mecanismo alternativo de solución de controversias implicaría la difusión de la información que se ha tratado y que ha sido expuesta por las personas intervinientes en el marco de la confidencialidad establecida por la Ley; principio que no solo constriñe a las personas intervinientes, sino también al personal Facilitador, quien en términos de los



artículos 51 fracción XIII de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, 46 fracción XIII, y 47 fracciones IV y XVII de la Ley de la Fiscalía General de la República, está obligado a mantener la confidencialidad de la información a la que ha tenido acceso en el ejercicio de su función, salvo las excepciones previstas en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

- II. **Perjuicio que supera el interés público:** el mantener la confidencialidad antes mencionada supera el ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que el mantenerla preserva los intereses de la justicia y garantiza el principio de legalidad, además de que protege el honor, reputación y vida privada de las víctimas u ofendidos, así como de las personas imputadas que participaron en los mecanismos alternativos y celebraron los acuerdos reparatorios con el fin de resolver las controversias de naturaleza penal en las que se vieron inmersas.
- III. **Principio de proporcionalidad:** reservar los acuerdo reparatorios no se considera un medio restrictivo al ejercicio del derecho de acceso a la información, en virtud de que la confidencialidad se encuentra justificada en la Ley que rige a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, aunado a que su divulgación contravendría las obligaciones establecidas en los artículos 51 fracción XIII de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, 46 fracción XIII, y 47 fracciones IV y XVII de la Ley de la Fiscalía General de la República.

Cabe resaltar que dentro de las obligaciones del personal facilitador, así como de todas las personas servidoras públicas de esta Fiscalía General de la República se encuentra el mantener el secreto, reserva y confidencialidad de la información y resguardar ésta al igual que la documentación a la que se ha tenido acceso en el ejercicio de sus funciones, tal como se desprende de los preceptos legales siguientes:

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal

Artículo 51. Obligaciones de los Facilitadores
Son obligaciones de los Facilitadores:

...

XIII. Mantener la confidencialidad de la información a la que tengan acceso en el ejercicio de su función, salvo las excepciones previstas en esta Ley;

Ley De La Fiscalía General De La República

Artículo 47. Son obligaciones de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General, las siguientes:

...

IV. Preservar el secreto, reserva y confidencialidad, en términos de las disposiciones aplicables, de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan;

...

XVII. Resguardar la documentación e información que por razón de sus funciones tengan bajo su responsabilidad o a la cual tengan acceso;

Aunado a los impedimentos normativos expuestos, este sujeto obligado se encuentra imposibilitado para proporcionar la información requerida, de conformidad con lo previsto en el **artículo 225**, fracción XXVIII del **Código Penal Federal**, que prevé lo siguiente:



Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

[...]

XXVIII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales; [...]

Lo anterior, sin dejar de lado lo previsto en el **artículo 49** de la **Ley General de Responsabilidades Administrativas**, el cual refiere:

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

[...]

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

Bajo este contexto, el servidor público que quebrante la reserva de la información, al dar a conocer datos inmersos en expedientes de investigación, a quien no tiene derecho, incumpliría en lo estipulado en el numeral antes citado, por lo que **estaría cometiendo el delito contra la Administración de Justicia** y, por ende, **se haría acreedor a las sanciones penales** correspondientes, **así como la sanción administrativa** correspondiente al incumplir con el debido resguardo de los documentos e información bajo su responsabilidad.

Por lo antes señalado, resulta aplicable la Tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual señala:

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

No es óbice mencionar que ese Órgano no tiene la certeza de que los procedimientos o procesos penales que motivaron la celebración de los acuerdos reparatorios requeridos hayan sido determinados, puesto que dicho acto corresponde a las autoridades judiciales; destacando además que los acuerdos celebrados pudieron haberse incumplido o bien, pudieron versar sobre la solución parcial de la controversia, por lo que, en dichos casos se dejaron a salvo los derechos de las personas intervinientes para resolver las controversias mediante las acciones legales conducentes.



B.5. Folio de la solicitud 330024622003367

Síntesis	Proyecto de Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Solicito el proyecto de Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica presentado en la Segunda Sesión Ordinaria 2022 Zonas Noreste y Noreste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada el 14 de octubre de 2022, así como presentado en la Segunda Sesión Ordinaria 2022 Zona Occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, llevada a cabo el 28 de octubre de 2022." (Sic)

Datos complementarios:

"<http://www.cnpj.gob.mx//Sesin%20Ordinaria/2%C2%AA%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20Zona%20Noreste%20y%20Noroeste%20de%20la%20Conferencia%20Nacional%20de%20Procuraci%C3%B3n%20de%20Justicia.pdf>

<http://www.cnpj.gob.mx//Sesin%20Ordinaria/2a%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20Zona%20Occidente%20de%20la%20Conferencia%20Nacional%20de%20Procuraci%C3%B3n%20de%20Justicia.pdf>" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM**.

**ACUERDO
CT/ACDO/0747/2022:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad determina **confirmar** la clasificación de reserva del proyecto de Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de Justicia Cívica, de conformidad con Modelo Nacional de Policía y el **artículo 110, fracción VIII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, hasta que las causas que dieron origen a la clasificación subsistan.



Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

De la Información Reservada

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

...
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo séptimo** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

Vigésimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, **fracción VIII** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.** Para tal efecto, el sujeto obligado deberá acreditar lo siguiente:

- I. **La existencia de un proceso deliberativo en curso, precisando la fecha de inicio;**
- II. **Que la información consista en opiniones, recomendaciones o puntos de vista de los servidores públicos que participan en el proceso deliberativo;**
- III. **Que la información se encuentre relacionada, de manera directa, con el proceso deliberativo, y**
- IV. **Que con su difusión se pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.**

Cuando se trate de insumos informativos o de apoyo para el proceso deliberativo, únicamente podrá clasificarse aquella información que se encuentre directamente relacionada con la toma de decisiones y que con su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación.

Se considera concluido el proceso deliberativo cuando se adopte de manera concluyente la última determinación, sea o no susceptible de ejecución; cuando el proceso haya quedado sin materia, o cuando por cualquier causa no sea posible continuar con su desarrollo.

En el caso de que la solicitud de acceso se turne a un área distinta de la responsable de tomar la decisión definitiva y se desconozca si ésta ha sido adoptada, el área receptora deberá consultar a la responsable, a efecto de determinar si es procedente otorgar el acceso a la información solicitada. En estos casos, no se interrumpirá el plazo para dar respuesta a la solicitud de información.

Tratándose de partidos políticos, se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos de sus órganos internos; la correspondiente a sus estrategias políticas, así como los estudios, encuestas y análisis utilizados para el desarrollo e implementación de dichas estrategias.

...
Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la **LFTAIP**, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:



Es importante puntualizar que, **existe un proceso deliberativo en curso** derivado de la aprobación del acuerdo Quinto de la Segunda sesión ordinaria 2022 de las zonas Noreste y Noroeste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, celebrada el 14 de octubre de 2022, que no podrá considerarse concluido hasta que la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tome un acuerdo definitivo sobre el asunto, como consta a continuación:

"QUINTO. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA.

Las personas integrantes de las Zonas Noreste y Noroeste tomamos conocimiento del proyecto de Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica e instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia que lo remita a todas las instituciones integrantes del órgano colegiado para su análisis y observaciones, con la finalidad de que se someta posteriormente a la consideración del Pleno de la Conferencia.

Asimismo, acordamos que, una vez aprobado el Protocolo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realice la capacitación correspondiente en el ejercicio fiscal 2023."

El proceso deliberativo antes referido ha sido refrendado mediante la aprobación de los acuerdos Octavo, Segundo y Séptimo aprobados en el segundo ciclo de sesiones ordinarias 2022 de las zonas Occidente, Sureste y Centro del órgano colegiado, que fueron celebradas el 28 de octubre, el 4 y 11 de noviembre de 2022, respectivamente², como consta a continuación:

Zona Occidente:

"OCTAVO. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA.

Las personas integrantes de la Zona Occidente tomamos conocimiento del proyecto de Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que fue remitido por la Secretaría Técnica de la Conferencia a las instituciones integrantes del órgano colegiado para su análisis y observaciones.

Haremos llegar nuestros comentarios a la Secretaría Técnica con la finalidad de que las remita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y, una vez que se encuentre integrado el Protocolo con las observaciones de las instituciones de procuración de justicia, se someta a la consideración del Pleno de la Conferencia.

² Las constancias de los acuerdos se encuentran publicadas y pueden ser consultadas en los siguientes enlaces:

<http://www.cnpi.gob.mx//Sesin%20Ordinaria/2%C2%AA%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20Zonas%20Noreste%20y%20Noroeste%20de%20la%20Conferencia%20Nacional%20de%20Procuraci%C3%B3n%20de%20Justicia.pdf>

<http://www.cnpi.gob.mx//Sesin%20Ordinaria/2a%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20Zona%20Occidente%20de%20la%20Conferencia%20Nacional%20de%20Procuraci%C3%B3n%20de%20Justicia.pdf>

<http://www.cnpi.gob.mx//Sesin%20Ordinaria/2a%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20Zona%20Centro%20de%20la%20Conferencia%20Nacional%20de%20Procuraci%C3%B3n%20de%20Justicia.pdf>

<http://www.cnpi.gob.mx//Sesin%20Ordinaria/2a%20Sesi%C3%B3n%20Ordinaria%20Zona%20Centro%20de%20la%20Conferencia%20Nacional%20de%20Procuraci%C3%B3n%20de%20Justicia.pdf>

Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria 2022



Asimismo, acordamos que, en caso de ser aprobado el Protocolo, el SESNSP realizará la capacitación correspondiente en el ejercicio fiscal 2023."

Zona Sureste:

"SEGUNDO. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA.

Las personas integrantes de la Zona Sureste tomamos conocimiento del proyecto de Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que fue remitido por la Secretaría Técnica de la Conferencia a las instituciones integrantes del órgano colegiado para su análisis y observaciones.

Haremos llegar nuestros comentarios a la Secretaría Técnica con la finalidad de que se remitan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y, una vez que se encuentre integrado el Protocolo con las observaciones de las instituciones de procuración de justicia, se someta a la consideración del Pleno de la Conferencia.

Asimismo, acordamos que, en caso de ser aprobado el Protocolo, el SESNSP realizará la capacitación correspondiente en el ejercicio fiscal 2023."

Zona Centro:

"SÉPTIMO. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA.

Las personas integrantes de la Zona Centro tomamos conocimiento del proyecto de Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que fue remitido previamente por la Secretaría Técnica de la Conferencia a las instituciones integrantes del órgano colegiado para su análisis y observaciones.

Haremos llegar nuestros comentarios a la Secretaría Técnica con la finalidad de que se remitan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y, una vez que se encuentre integrado un proyecto con las observaciones de las instituciones de procuración de justicia, se someta a la consideración del Pleno de la Conferencia.

Asimismo, acordamos que, en caso de ser aprobado el Protocolo, el SESNSP realizará la capacitación correspondiente a partir del ejercicio fiscal 2023."

Como consta en los acuerdos antes citados, el proyecto de Protocolo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica es un documento en proceso de desarrollo que **integra progresivamente las observaciones emitidas por servidores públicos de las instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas que participan en el proceso deliberativo.**

Dicho **proyecto de Protocolo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica** es el objeto de un **proceso deliberativo** consistente en el análisis, emisión de opinión técnico-jurídica y votación, y se modifica con base en el desarrollo de este proceso, hasta que el órgano



colegiado tome una resolución por mayoría de votos³, por lo que no existe una versión definitiva.

La difusión del *proyecto de Protocolo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica* puede provocar la intervención de **agentes ajenos al proceso deliberativo** que, en la persecución de intereses particulares distintos a los del Estado en materia de seguridad pública y procuración de justicia, **pudiesen llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación**, por lo que resulta necesaria la reserva del proyecto hasta que las decisiones definitivas sean aprobadas mediante acuerdo del Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

En ese sentido, se procede a motivar la clasificación de la información de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que prevén:

"Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

...

Artículo 104. **En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:**

- I. La divulgación de la información representa un **riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público** o a la seguridad nacional;
- II. El **riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general** de que se difunda, y
- III. La limitación se adecua al **principio de proporcionalidad** y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio".

Aunado a lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deben motivar la clasificación de la información mediante las razones o circunstancias especiales para poder acreditar la prueba de daño correspondiente, misma que en todo momento deberá aplicarse al caso concreto, como se manifiesta a continuación:

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable:** La publicidad del proyecto de Protocolo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica podría generar una condición ventajosa para los grupos de la delincuencia organizada y obstaculizar las acciones de las autoridades para su combate, pues permitiría que estos grupos anticipen las estrategias de coordinación del ministerio público y de las policías para la investigación y persecución de los delitos, y comprometería con ello la seguridad pública y la seguridad nacional.

Asimismo, la publicidad del proyecto daría una oportunidad a los grupos delictivos para intervenir, interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación, a **efecto de obstaculizar el**

³ De conformidad con el artículo 8 de los *Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia*.
Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria 2022



desarrollo e implementación de una política pública de coordinación entre las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el fortalecimiento de las capacidades de investigación y de persecución penal

- II. **Perjuicio que supera el interés público:** Toda vez que la difusión del proyecto de Protocolo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica representa un riesgo real al interés público y a la seguridad nacional, en términos del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación del documento supera el interés público general de que se difunda a un particular.
- III. **Principio de Proporcionalidad:** La limitación es proporcional al riesgo que implica la difusión del proyecto de Protocolo del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que, en caso de realizarse una difusión parcial del documento, prevalecería el riesgo al interés público y a la seguridad nacional, por los motivos antes expuestos.



B.6. Folio de la solicitud 330024622003380

Síntesis	Investigaciones en contra de terceros
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"Solicito se requiera a la Fiscalía General de la Republica, brinde la siguiente información: Si existe alguna Averiguación Previa y/o carpeta de investigación, a partir del año 2018 a la fecha, a nombre de Carlos Bárcenas Jiménez alias "EL PELON" O "EL CHARLY"; de ser positiva la consulta informar el número de averiguación previa y/o carpeta de investigación, causa penal, debiendo informar en donde se encuentra radicada, el nombre del o los ministerios públicos que actúan dentro de la misma, cual es el delito y/o delitos que dan inicio la carpeta de investigación y/o Averiguación Previa y el estado procesal en el que se encuentra la misma, si es que existen personas procesadas derivadas de los mismos hechos y si se encuentran privados de su libertad o llevando un el proceso fuera del Centro de Reclusión; derivado de que el día 06 (seis) de febrero del año 2017 (dos mil diecisiete), personal de PGR, SEDENA y SEGURIDAD FISICA DE PEMEX, aseguraron un inmueble en el lugar conocido como "La curva de la cuesta" en Sayula pueblo, Tepatitlán, Hidalgo, donde se almacenaba combustible. Por lo que el 30 (treinta) de enero del año 2018 (dos mil dieciocho, se realizó un operativo por parte de la procuraduría General de la Republica, en un lugar conocido como "Cerro el Varal", donde fue detenido Carlos Bárcenas Jiménez alias "EL PELON" O "EL CHARLY." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FECOC, FEMDO y FECOR.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0748/2022:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad determina **confirmar** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación o proceso de extradición en contra de la persona señalada



en la solicitud, de conformidad con lo previsto en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine la culpabilidad de una persona física a través de una sentencia condenatoria irrevocable o sanción firme, divulgar el nombre de una persona sujeta a un proceso penal, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

En tales consideraciones, esta **Fiscalía General de la República se encuentra imposibilitada jurídicamente para pronunciarse** al respecto; toda vez que esta posee información que se ubica en el ámbito de lo privado, encontrando para tal efecto la protección bajo la figura de la **confidencialidad** en términos del **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP; ya que afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna **indagatoria, denuncia, averiguación previa o carpeta de investigación** en contra de una persona física identificada o identificable, como es el caso que nos ocupa, **se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona en comento.**

De esta forma, la imposibilidad por parte de esta Fiscalía para señalar la existencia o no de la información requerida actualiza la causal de confidencialidad prevista en el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP, que a la letra establece:

Artículo 113. Se considera **información confidencial**:

*I. La que contiene **datos personales concernientes a una persona física** identificada o identificable;*
[...]

Asimismo, este precepto legal establece que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de esta, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello.

En seguimiento a lo anterior, los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas*, disponen lo siguiente:

Trigésimo octavo. Se considera **información confidencial**:

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
[...]

Trigésimo noveno. Los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, no podrán clasificarse como confidenciales ante sus titulares.

De lo expuesto, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga **datos personales de una persona física identificada o identificable**, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que **sólo podrán tener acceso los titulares de la información** o sus representantes legales.

Por tal motivo, se insiste que el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna denuncia, imputación, procedimiento relacionado con la comisión de delitos, **afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre**, incluso **vulnera la presunción de inocencia**, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la



autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia.

Al efecto, se debe considerar que dichos **derechos están constitucional e internacionalmente reconocidos**, conforme los **artículos 1°, 6° y 16°** de nuestra Carta Magna, de donde se desprende que **toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada y a la protección de sus datos personales** y todo lo que esto conlleva, así como el normal desarrollo de su personalidad, estableciendo lo siguiente:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

[...]

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

[...]

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Aunado a esto, el *Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)*, específicamente en su artículo 15, dispone que **cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como parte en el procedimiento penal**, a saber:

*Artículo 15. **Derecho a la intimidad y a la privacidad***

*En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad **de cualquier persona que intervenga en él**, asimismo se protegerá la información que se refiere a la **vida privada y los datos personales**, en los términos y con las excepciones que fijen la Constitución, este Código y la legislación aplicable.*

Es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información **tiene límites**, los cuales aplican en el momento en que se afecta el **honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas**; además de definir la **afectación a la moral**, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

DAÑO MORAL ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO. El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto



publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. **Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.**⁴

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público. Así, la manifestación de las ideas se encuentra consagrada como uno de los derechos públicos individuales fundamentales que reconoce la Constitución, oponible por todo individuo, con independencia de su labor profesional, al Estado, y los artículos 7o. y 24 de la propia Carta Fundamental se refieren a aspectos concretos del ejercicio del derecho a manifestar libremente las ideas. El primero, porque declara inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia y, el segundo, porque garantiza la libertad de creencias religiosas. Así, el Constituyente Originario al consagrar la libertad de expresión como una garantía individual, reconoció la necesidad de que el hombre pueda y deba, siempre, tener libertad para apreciar las cosas y crear intelectualmente, y expresarlo, aunque con ello contrarie otras formas de pensamiento; de ahí que sea un derecho oponible al Estado, a toda autoridad y, por ende, es un derecho que por su propia naturaleza debe subsistir en todo régimen de derecho. En efecto, la historia escrita recoge antecedentes de declaraciones sobre las libertades del hombre, y precisa que hasta el siglo XVIII, se pueden citar documentos sobre esa materia. No hay duda histórica sobre dos documentos básicos para las definiciones de derechos fundamentales del hombre y su garantía frente al Estado. El primero es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, la cual se mantiene viva y vigente como texto legal por la remisión que hace el preámbulo de la Constitución de Francia de fecha veinticuatro de diciembre de mil setecientos noventa y nueve. El segundo, es la Constitución de los Estados Unidos de América, de diecisiete de septiembre de mil setecientos ochenta y siete. En la historia constitucional mexicana, que recibe influencia de las ideas políticas y liberales de quienes impulsaron la Revolución Francesa, así como contribuciones de diversas tendencias ideológicas enraizadas en las luchas entre conservadores y liberales que caracterizaron el siglo XIX, tenemos que se hicieron y entraron en vigor diversos cuerpos constitucionales, pero en todos ellos siempre ha aparecido una parte dogmática que reconoce derechos inherentes al hombre, y que ha contenido tanto la libertad de expresión como la libertad de imprenta. Por otra parte, los antecedentes legislativos relacionados con la reforma y adición a la Constitución de mil novecientos diecisiete, en relación al artículo 6o. antes precisado, tales como la iniciativa de ley, el dictamen de la comisión que al efecto se designó, y las discusiones y el proyecto de declaratoria correspondientes, publicados, respectivamente, en los Diarios de los Debates de los días seis, veinte de octubre y primero de diciembre, todos de mil novecientos setenta y siete, ponen de relieve que el propósito de las reformas fue el de preservar el derecho de todos respecto a las actividades que regula. Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que **en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.** Asimismo, ese derecho del individuo, con la adición al contenido original del artículo 6o., quedó también equilibrado con el derecho que tiene la sociedad a estar veraz y objetivamente informada para evitar que haya manipulación. Así, el Estado asume la obligación de cuidar que la

⁴ Tesis Jurisprudencial, I3o.C. J/71 (9a.), Libro IV, Tomo 5, Pág. 4036, enero de 2012, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito. Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria 2022



información que llega a la sociedad a través de los grandes medios masivos de comunicación refleje la realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al acceso a la cultura en general, para que el pueblo pueda recibir en forma fácil y rápida conocimientos en el arte, la literatura, en las ciencias y en la política.

Ello permitirá una participación informada para la solución de los grandes problemas nacionales, y evitará que se deforme el contenido de los hechos que pueden incidir en la formación de opinión. Luego, **en el contenido actual del artículo 6o., se consagra la libertad de expresarse, la cual es consustancial al hombre, y que impide al Estado imponer sanciones por el solo hecho de expresar las ideas. Pero correlativamente, esa opinión tiene límites de cuya transgresión derivan consecuencias jurídicas. Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público. De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.**⁵

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, **el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.**⁶

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé:

Artículo 12. **Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.** Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señala:

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- **Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.**
- 2.- **Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.**
- 3.- **Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.**

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece:

Artículo 17.

1. **Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.**
2. **Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.**

⁵ Tesis Aislada, I.3o.C.244 C, Tomo: XIV, septiembre de 2001, Novena Época, Tercer Tribunal Colegiado Circuito.

⁶ Tesis Aislada, P. LX/2000, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, Pleno.



Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

Artículo 218. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, **son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.**

Por lo que, al efecto, en el caso que nos ocupa, **se actualiza la limitante del derecho a la información, constreñida en la confidencialidad y secrecía que le asiste a toda persona,** como en el caso lo es, de la persona de quien solicitan la información.



B.7. Folio de la solicitud 330024622003400

Síntesis	Información sobre personal de la institución
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Respetable titular de transparencia y acceso a la información, por este medio le pido de su apreciable apoyo para solicitarle información acerca de su ex funcionaria pública la C. AIDEE VELÁZQUEZ RAMÍREZ la información que se solicita es la siguiente.

1. *¿Cuáles fueron los motivos por los que la funcionaria antes mencionada dejará de trabajar en su dependencia?*

2. *Durante el tiempo que la funcionaria antes mencionada prestó sus servicios en su dependencia ¿Fue objeto de denuncias, quejas administrativas o algún otro proceso, que dejará en evidencia que no cumplió con sus funciones? De ser por favor anexe los documentos en su versión pública.*

Todo lo anterior en atención al principio de máxima publicidad, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Sic).

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0749/2022:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad determina **confirmar** la clasificación de reserva respecto de afirmar o negar que la persona citada en la solicitud labore o no en la Fiscalía General de la República, en términos del **artículo 110, fracción V** de la Ley de la materia, hasta por un periodo de cinco años, o bien cuando las causas que dieron origen a su clasificación subsistan.



Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

De la Información Reservada

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

...
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésimo primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, **será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.**

...
Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la **LFTAIP**, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón de que dadas las funciones y la naturaleza del personal sustantivo/administrativo de esta Fiscalía General de la República, al proporcionar información como se requiere, sería aseverar que dicha persona se encuentra o encontraba adscrita a esta Institución Federal en la realización de diversas actividades, lo cual pone en riesgo la vida, seguridad y salud, así como la de su familia, en virtud de que aun cuando dicho personal no realiza tareas sustantivas, si cuenta con acceso a información relativa a operativos, turnos de asuntos, información de personal sustantivo, así como aquella que es inherente a las facultades de los Agentes de Ministerio Público de la Federación.

Derivado de lo anterior y toda vez que, al ser identificados podrían ser objeto de amenazas, represalias o ataques físicos o morales por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener información sensible que podría incidir en las actividades realizadas en la investigación y persecución de los delitos.

- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público general de que se difunda, toda vez que es necesario reservar la información que haga identificable al personal que es o fue sustantivo/administrativo de la Institución, ya que proporcionar algún dato que asevere su adscripción, pone en riesgo su integridad física y seguridad, así como las actividades que realiza o realizó este tipo de personas, en el sentido de que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a un interés particular.
- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, porque en un ejercicio de ponderación de derechos, el interés de salvaguardar la vida seguridad y salud de las personas, con independencia que se trate de servidores públicos, se encuentra sobre un interés





B.8. Folio de la solicitud 330024622003401

Síntesis	Delitos relacionados con ataques a las vías generales de comunicación
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada y confidencial

Contenido de la Solicitud:

"Adjunto al presente remito a Usted, escrito de fecha 06 de noviembre de 2022, mediante el cual solicito al Licenciado Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la Fiscalía General de la República, tenga a bien de entregar información pública que se encuentra en los archivos físicos y electrónicos de esa H. Autoridad a su cargo." (Sic)

[...]

*Vengo a solicitar a usted Fiscal General de la Fiscalía General de la República, gire sus apreciables instrucciones a todos los agentes del ministerio público de la federación del país y a quien corresponda, con el fin de proporcionar vía electrónica, un **listado en el conste todas las denuncias presentadas con motivo de la probable comisión del delito de ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, previsto en el artículo 167 fracción II del Código Penal Federal, denuncias presentadas ante esa H. Autoridad a su cargo, entre el 01 de enero del año 2000 al 06 de noviembre del año 2022.***

*Sobre el particular, requiero que toda la información proporcionada sea **desglosada por nombre y/o razón social del denunciante, lugar (sede, subsele, delegación o agencia) donde se presentó la denuncia, número de carpeta de investigación y/o averiguación previa iniciada, año y mes de la denuncia presentada y el lugar donde se cometió el delito.*** (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM y FECOR.**

ACUERDO

CT/ACDO/0750/2022:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de las **número o nomenclaturas** de los expedientes de investigación relacionadas con el tema interés del particular, así como **cualquier dato o información**



contenido dentro de los expedientes de investigación, de conformidad con el **artículo 110, fracción XII** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a su clasificación subsistan.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

De la Información Reservada

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésimo primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, **fracción XII** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable:** Es un riesgo real, el dar a conocer las nomenclaturas de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, toda vez que se encuentran contenidas dentro de las indagatorias, además que son un instrumento para identificarlas, por lo que, con la obtención de las mismas, y de una simple búsqueda en los diversos medios electrónicos disponibles, fácilmente se podrían obtener datos adicionales de las partes que intervienen en la investigación e inclusive actos de ésta misma, los cuales no son de carácter público y que posiblemente en algunos casos puede haber solicitud expresa de confidencialidad de los datos personales, solicitados por los involucrados, exponiendo un riesgo muy alto de trastocar la esfera de su libre desarrollo de la personalidad y vulnerar con ello, su derecho a la intimidad, así como al de su privacidad, máxime que el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respeten éstos; así como que se proteja la información de su vida privada y datos personales, ya que, de revelar alguna información, aún de forma indirecta, atentaría contra su intimidad, honor, inclusive su buen nombre; aunado a lo establecido en el artículo 218 del mismo Código Adjetivo, que ordena la estricta reserva de cualquier dato que se encuentre contenido en las investigaciones, lo que incluye desde luego a las nomenclaturas.



Es un riesgo real, demostrable e identificable porque podría, inclusive, implicar el quebrantamiento a diversos principios que rigen el sistema penal como los son: el de presunción de inocencia, debido proceso, tutela judicial efectiva, del mismo modo, se pondría en riesgo el pleno ejercicio de algún acto o acción de las partes en la investigación, además con dichos datos se podría obtener información que vulneraría la seguridad e identidad de las víctimas u ofendidos, y consecuentemente, trastocar su derecho a la reparación del daño.

Por otra parte, dar a conocer las nomenclaturas, hace identificable la radicación exacta donde se lleva a cabo la investigación, lo que resulta un riesgo no solo para víctimas, ofendidos o los probables responsables involucrados en las indagatorias, sino para el propio personal de la institución.

Ello es así porque las nomenclaturas se integran por: a) Las iniciales de la averiguación previa o carpeta de investigación, con lo que se podría identificar el tipo de procedimiento que se está siguiendo (sistema tradicional o acusatorio), b) La abreviación de la Subprocuraduría y/o Fiscalía Especializada y Unidad Administrativa (Delegación Estatal) en que se inicia, c) El número consecutivo y d) El año en el que se registra. Al contar con esos datos se expondría información relacionada con el lugar en el que se radicó la indagatoria, la unidad que lo investiga, datos del personal sustantivo, delito motivo de la investigación, nombres de personas físicas identificadas o identificables entre otros datos personales de carácter confidencial de los involucrados, que hacen que su identidad pueda ser determinada.

En ese sentido, entregar la nomenclatura de las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación implica inexorablemente exponer los datos de las actividades realizadas en cumplimiento de las funciones de esta Fiscalía General de la República, provocando que cualquier persona pudiese aprovecharse de ellas, entorpeciendo o interrumpiendo los actos de investigación y persecución de los delitos, quebrantando inclusive el sigilo que deben guardar estas, como se mencionó con antelación respecto del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.

- II. Perjuicio que supera el interés público: Reservar las nomenclaturas de las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación no contraviene el derecho a la información, ni al principio de máxima publicidad porque se trata de un interés particular, que conforme los argumentos que se han señalado en la presente, no rebasa la obligación constitucional de esta Fiscalía General de la República, consistente en proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y dado que ningún derecho es ilimitado se considera que la reserva de la información solicitada relativa a las nomenclaturas no vulnera el interés público y en cambio, la divulgación de ésta, causaría un perjuicio a la sociedad y las partes en las indagatorias, pues dicha reserva en todo caso sería un perjuicio que no supera el interés público, ya que no se vulnerarían las disposiciones contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se transgredirían derechos humanos, derechos procesales de las partes, los posibles procesos que deriven de ella, los datos de prueba recabados en la investigación inicial y que, en su momento, sustenten el proceso ante el órgano jurisdiccional.



Maxime que esta institución tiene como encargo constitucional la investigación y ejercicio de la acción penal en delitos del orden federal, a fin de dar cumplimiento al objeto del proceso penal que es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, por ende, es deber de la institución preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- III. Principio de proporcionalidad: El reservar las nomenclaturas de las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, si bien, toda la información en posesión de las autoridades es pública y susceptible de acceso a los particulares; las nomenclaturas de las indagatorias no son simple información de carácter público sino como ha quedado evidenciado por las razones antes aludidas, forman parte de la actividad constitucional de investigación y persecución del delito, por lo que, es razonable su reserva, considerando que, el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, como lo es el caso.

Mas aún, que al efecto su requerimiento no obedece a un derecho superior o de interés público para justificar la entrega de las nomenclaturas de las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, en virtud de que como ya se dijo, al hacerlas identificables se expondría información sensible y que no es de carácter público, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos, ya que inclusive al vulnerar los principios que rigen el proceso penal, se podría contravenir el objeto de éste respecto del esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, desde la investigación inicial.

Por lo que la reserva invocada se considera una medida proporcional y menos restrictiva a su derecho de acceso a la información, considerando que se le entrega la información estadística requerida y en conjunto con información que se encuentra públicamente disponible podría allegarse de mayores elementos para complementar la integridad de su solicitud.

ACUERDO
CT/ACDO/0751/2022:

Por otro lado, este Órgano Colegiado ha determinado **confirmar** la clasificación de confidencialidad del "**nombre y/o razón social del denunciante**", que requiere conocer el particular, en términos del artículo **113 fracciones I y III de la LFTAIP**.

Toda vez que, en tanto la autoridad competente no determine la culpabilidad de una persona **física o moral** a través de una sentencia condenatoria irrevocable o sanción firme, divulgar el nombre de una persona sujeta a un proceso penal, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

En tales consideraciones, esta **Fiscalía General de la República se encuentra imposibilitada jurídicamente para pronunciarse** al respecto; toda vez que esta posee información que se ubica en el ámbito de lo privado, encontrando para tal efecto la protección bajo la figura de la **confidencialidad** en términos del **artículo 113, fracciones I y III de la LFTAIP**; ya que afirmar o



negar la existencia o inexistencia de alguna **indagatoria, denuncia, averiguación previa o carpeta de investigación** en contra de una persona física identificada o identificable, como es el caso que nos ocupa, **se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona en comento.**

De esta forma, la imposibilidad por parte de esta Fiscalía para señalar la existencia o no de la información requerida actualiza la causal de confidencialidad prevista en el **artículo 113, fracciones I y III** de la LFTAIP, que a la letra establece:

Artículo 113. Se considera **información confidencial**:

*I. La que contiene **datos personales concernientes a una persona física** identificada o identificable;*

[...]

III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

Asimismo, este precepto legal establece que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de esta, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello.

En seguimiento a lo anterior, los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas*, disponen lo siguiente:

Trigésimo octavo. Se considera **información confidencial**:

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;

[...]

Trigésimo noveno. Los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, no podrán clasificarse como confidenciales ante sus titulares.

Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la información por confidencialidad, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

I. La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y

II. La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.

De lo expuesto, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga **datos personales de una persona física identificada o identificable**, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que **sólo podrán tener acceso los titulares de la información** o sus representantes legales.

Por tal motivo, se insiste que el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna denuncia, imputación, procedimiento relacionado con la comisión de delitos, **afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre**, incluso **vulnera la presunción de inocencia**, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia.



Al efecto, se debe considerar que dichos **derechos están constitucional e internacionalmente reconocidos**, conforme los **artículos 1°, 6° y 16°** de nuestra Carta Magna, de donde se desprende que **toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada y a la protección de sus datos personales** y todo lo que esto conlleva, así como el normal desarrollo de su personalidad, estableciendo lo siguiente:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, **sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.** El derecho a la información será garantizado por el Estado.
[...]

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
[...]

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los **supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos**, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Aunado a esto, el *Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)*, específicamente en su artículo 15, dispone que **cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como parte en el procedimiento penal**, a saber:

Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad **de cualquier persona que intervenga en él**, asimismo se protegerá la información que se refiere a la **vida privada y los datos personales**, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Es oportuno traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información **tiene límites**, los cuales aplican en el momento en que se afecta el **honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas**; además de definir la **afectación a la moral**, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO. El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de



información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. **Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.**⁷

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público. Así, la manifestación de las ideas se encuentra consagrada como uno de los derechos públicos individuales fundamentales que reconoce la Constitución, oponible por todo individuo, con independencia de su labor profesional, al Estado, y los artículos 7o. y 24 de la propia Carta Fundamental se refieren a aspectos concretos del ejercicio del derecho a manifestar libremente las ideas. El primero, porque declara inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia y, el segundo, porque garantiza la libertad de creencias religiosas. Así, el Constituyente Originario al consagrar la libertad de expresión como una garantía individual, reconoció la necesidad de que el hombre pueda y deba, siempre, tener libertad para apreciar las cosas y crear intelectualmente, y expresarlo, aunque con ello contrarie otras formas de pensamiento; de ahí que sea un derecho oponible al Estado, a toda autoridad y, por ende, es un derecho que por su propia naturaleza debe subsistir en todo régimen de derecho. En efecto, la historia escrita recoge antecedentes de declaraciones sobre las libertades del hombre, y precisa que hasta el siglo XVIII, se pueden citar documentos sobre esa materia. No hay duda histórica sobre dos documentos básicos para las definiciones de derechos fundamentales del hombre y su garantía frente al Estado. El primero es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, la cual se mantiene viva y vigente como texto legal por la remisión que hace el preámbulo de la Constitución de Francia de fecha veinticuatro de diciembre de mil setecientos noventa y nueve. El segundo, es la Constitución de los Estados Unidos de América, de diecisiete de septiembre de mil setecientos ochenta y siete. En la historia constitucional mexicana, que recibe influencia de las ideas políticas y liberales de quienes impulsaron la Revolución Francesa, así como contribuciones de diversas tendencias ideológicas enraizadas en las luchas entre conservadores y liberales que caracterizaron el siglo XIX, tenemos que se hicieron y entraron en vigor diversos cuerpos constitucionales, pero en todos ellos siempre ha aparecido una parte dogmática que reconoce derechos inherentes al hombre, y que ha contenido tanto la libertad de expresión como la libertad de imprenta. Por otra parte, los antecedentes legislativos relacionados con la reforma y adición a la Constitución de mil novecientos diecisiete, en relación al artículo 6o. antes precisado, tales como la iniciativa de ley, el dictamen de la comisión que al efecto se designó, y las discusiones y el proyecto de declaratoria correspondientes, publicados, respectivamente, en los Diarios de los Debates de los días seis, veinte de octubre y primero de diciembre, todos de mil novecientos setenta y siete, ponen de relieve que el propósito de las reformas fue el de preservar el derecho de todos respecto a las actividades que regula. Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que **en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.** Asimismo, ese derecho del individuo, con la adición al contenido original del artículo 6o., quedó también equilibrado con el derecho que tiene la sociedad a estar veraz y objetivamente informada, para evitar que haya manipulación. Así, el Estado asume la obligación de cuidar que la información que llega a la sociedad a través de los grandes medios masivos de comunicación refleje la realidad y tenga un contenido que permita y coadyuve al acceso a la cultura en general, para que el

⁷ Tesis Jurisprudencial, I,3o.C. J/71 (9a.), Libro IV, Tomo 5, Pág. 4036, enero de 2012, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito. Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria 2022



pueblo pueda recibir en forma fácil y rápida conocimientos en el arte, la literatura, en las ciencias y en la política.

Ello permitirá una participación informada para la solución de los grandes problemas nacionales, y evitará que se deforme el contenido de los hechos que pueden incidir en la formación de opinión. Luego, **en el contenido actual del artículo 6o., se consagra la libertad de expresarse, la cual es consustancial al hombre, y que impide al Estado imponer sanciones por el solo hecho de expresar las ideas. Pero correlativamente, esa opinión tiene límites de cuya transgresión derivan consecuencias jurídicas. Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público. De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.**⁸

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS.

El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.⁹

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé:

Artículo 12. **Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.**

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, señala:

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- **Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.**
- 2.- **Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.**
- 3.- **Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.**

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece:

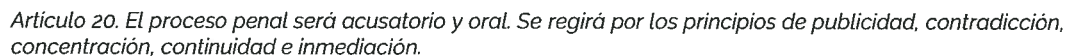
Artículo 17.

3. **Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.**
4. **Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.**

No se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia** es una garantía de cualquier persona imputada, prevista en el artículo 20 de la **CPEUM**, que a la letra dispone:

⁸ Tesis Aislada, I.30.C.244 C, Tomo: XIV, septiembre de 2001, Novena Época, Tercer Tribunal Colegiado Circuito.

⁹ Tesis Aislada, P. LX/2000, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, Pleno.



A que se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

Artículo 218. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, *independientemente* de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, **son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables.**

Por lo que, al efecto, en el caso que nos ocupa, **se actualiza la limitante del derecho a la información, constreñida en la confidencialidad y secrecía que le asiste a toda persona,** como en el caso lo es, de la persona de quien solicitan la información.



B.9. Folio de la solicitud 330024622003421

Síntesis	Carpeta de investigación FED/GTO/SAL/1411/2020
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:

*"Se solicita la versión pública de la **carpeta de investigación FED/GTO/SAL/1411/2020.**" (Sic)*

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FECOR**.

ACUERDO

CT/ACDO/0752/2022:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad determina **confirmar** la clasificación de reserva **invocada** por la **FECOR**, en términos del **artículo 110 fracción XII** de la LFTAIP, en relación con el diverso **218 del CNPP** y Trigésimo primero de los Lineamientos generales, hasta por un periodo de cinco años, o bien, cuando las causas que dieron origen a la clasificación subsistan.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

De la Información Reservada

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Trigésimo primero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:



Trigésimo primero. De conformidad con el artículo 113, **fracción XII** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, **aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.**

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se exponen las siguientes pruebas de daño:

- I. Es un riesgo real toda vez que, al dar a conocer la información solicitada por el particular se expondrían las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen los indicios para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar o no la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional competente, es un riesgo demostrable, ya que al otorgar la información solicitada se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República; y es un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con carpetas de investigación y al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
- II. Tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida por el particular vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés general, por lo que tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos.
- III. El reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública toda vez que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la protección del expediente de indagatoria, consistentes en la investigación y persecución de delitos, como los son las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo y la probable responsabilidad del indiciado, siendo dichas acciones orientadas al bienestar general de la sociedad, y no así a una determinada persona.



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



COMITE DE
TRANSPARENCIA

Aunado a los impedimentos normativos expuestos, esta Autoridad se encuentra imposibilitada para proporcionar la información, por lo establecido en el **artículo 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal**:

"Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

XXVIII.- Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales;

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones... XXVIII... se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa."



C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de la documentación requerida:

C.1. Folio de la solicitud 330024622003399

Síntesis	Información relacionada con la contratación entre la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República y Global STD Certification
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Información clasificada parcialmente como confidencial

Contenido de la Solicitud:

- 1.- Muestre el historial (desde la primera certificación a la última) que detalle los costos de todas y cada una de las certificaciones "ISO 37001:2016" convenida entre la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República y Global STD Certification.
- 2.- Exhiba las facturas o comprobantes correspondientes de los pagos efectuados entre FEAI y Global STD Certification por la prestación de servicios "ISO 37001:2016".
- 3.- En caso de provenir de un recurso de la federación señale la partida presupuestal y monto que corresponde.
- 4.- Muestre los resultados de todas las certificaciones y/o de recomendaciones hechas a la FEAI, por parte de la norma "ISO 37001:2016".
- 5.- Exhiba el contrato de prestación de servicios entre la FEAI y Global STD Certification, para la prestación de servicios en materia de la norma "ISO 37001:2016". (Sic)

Datos complementarios:

"Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República, tel. 800 890 9780." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FEAI y UTAG.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0753/2022:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad determina **confirmar** la clasificación de confidencial de los **datos personales de personas físicas**



y **morales** contenidos en las facturas y contratos celebrados con Global Standards S.C., en términos del **artículo 113, fracciones I y III** de la LFTAIP.

Lo anterior, a efecto de poner a disposición la versión pública de las documentales señaladas y que atienen el punto 2 y 5 de la solicitud.

Así las cosas, dichos documentos al contener información clasificada como **confidencial**, actualiza la clasificación y resguardo de datos personales, de conformidad con lo previsto en el **artículo 113 fracciones I y III** de la LFTAIP.

Por todo lo anterior, se precisa que el **artículo 113, fracción I** de la LFTAIP, prevé lo siguiente:

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable:

...
III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello (...)

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga **datos personales** de personas físicas y morales identificadas o identificables identificadas o identificables, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que **solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.**

Refuerza lo anterior, lo que se indica en los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, en su numeral **Trigésimo Octavo** que establecen lo siguiente:

**CAPÍTULO VI
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**

Trigésimo octavo. Se considera información confidencial:

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable:

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

...
Cuadragésimo. En relación con el último párrafo del artículo 116 de la Ley General, para clasificar la **información por confidencialidad**, no será suficiente que los particulares la hayan entregado con ese carácter ya que los sujetos obligados deberán determinar si aquéllos son



titulares de la información y si tienen el derecho de que se considere clasificada, debiendo fundar y motivar la confidencialidad. La información que podrá actualizar este supuesto, entre otra, es la siguiente:

- I. **La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y**
- II. **La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor por ejemplo, la relativa a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdos de los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o actas de asamblea.**

Al efecto, dicho derecho está constitucionalmente reconocido conforme los artículos 1°, 6° y 16° de nuestra Carta Magna, de donde se desprende que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida privada y todo lo que esto conlleva, así como el normal desarrollo de su personalidad, a decir:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, **sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.** [...]

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su **persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.**

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 628/2008, en el sentido de que hay información que concierne al quehacer de una persona moral y que, guardadas todas las proporciones, es para esa persona, lo que el dato personal es para la persona física. En tal tesitura, se trae a colación los siguientes criterios emitidos por el Supremo Órgano Jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación

Época: Décima Época Registro: 2005522 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P. II/2014 (10a.) Página: 274 PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e



información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 6o., en relación con el 16, párrafo segundo, constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente. Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas

El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número II/2014 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil catorce. Décima Época 2000082. 1a. XXI/2011 (10a.). Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Pág. 2905. DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. Toda persona física es titular del derecho al honor, pues el reconocimiento de éste es una consecuencia de la afirmación de la dignidad humana. Sin embargo, el caso de las personas jurídicas o morales presenta mayores dificultades, toda vez que de ellas no es posible predicar dicha dignidad como fundamento de un eventual derecho al honor. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es necesario utilizar la distinción entre el honor en sentido subjetivo y objetivo a fin de resolver este problema. Resulta difícil poder predicar el derecho al honor en sentido subjetivo de las personas morales, pues carecen de sentimientos y resultaría complicado hablar de una concepción que ellas tengan de sí mismas. Por el contrario, en lo relativo a su sentido objetivo, considerando el honor como la buena reputación o la buena fama, parece no sólo lógico sino necesario sostener que el derecho al honor no es exclusivo de las personas físicas, puesto que las personas jurídicas evidentemente gozan de una consideración social y reputación frente a la sociedad. En primer término, es necesario tomar en cuenta que las personas denominadas jurídicas o morales son creadas por personas físicas para la consecución de fines determinados, que de otra forma no se podrían alcanzar, de modo que constituyen un instrumento al servicio de los intereses de las personas que las crearon. En segundo lugar, debemos considerar que los entes colectivos creados son la consecuencia del ejercicio previo de otros derechos, como la libertad de asociación, y que el pleno ejercicio de este derecho requiere que la organización creada tenga suficientemente garantizados aquellos derechos fundamentales que sean necesarios para la consecución de los fines propuestos. En consecuencia, es posible afirmar que las personas jurídicas deben ser titulares de aquellos derechos fundamentales que sean acordes con la finalidad que persiguen, por estar encaminados a la protección de su objeto social, así como de aquellos que aparezcan como medio o instrumento necesario para la consecución de la referida finalidad. Es en este ámbito que se encuentra el derecho al honor, pues el desmerecimiento en la consideración ajena sufrida por determinada persona jurídica, conllevará, sin duda, la imposibilidad de que ésta pueda desarrollar libremente sus actividades encaminadas a la realización de su objeto social o, al menos, una afectación ilegítima a su posibilidad de hacerlo. En consecuencia, las personas jurídicas también pueden ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando otra persona la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena. Amparo directo 28/2010. Demos. Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. 2000082. 1a. XXI/2011 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Pág. 2905

De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la **fracción VI**,



artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es del tenor literal siguiente:

Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

VI. Adoptar Las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados **no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones**, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de Los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley.

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo con la normatividad aplicable.

En tal tesitura, se trae a colación los siguientes criterios emitidos por el Supremo Órgano Jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación:

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: **el de información confidencial** y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, el artículo 18 de la ley estableció como criterio de clasificación el de **información confidencial**, el cual **restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización**. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual **reconoce que el derecho a la protección de datos personales** -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general, salvo los casos excepcionales que se prevean en la legislación secundaria; así como en la fracción V, del apartado C, del artículo 20 constitucional, que protege la identidad y datos personales de las víctimas y ofendidos que sean parte en procedimientos penales. Así pues, **existe un derecho de acceso a la información pública que rige como regla general, aunque limitado, en forma también genérica, por el derecho a la protección de datos personales**. Por lo anterior, el acceso público -para todas las personas independientemente del interés que pudieren tener- a los datos personales distintos a los del propio solicitante de información sólo procede en ciertos supuestos, reconocidos expresamente por las leyes respectivas. Adicionalmente, **la información confidencial puede dar lugar a la clasificación de un documento en su totalidad o de ciertas partes o pasajes del mismo, pues puede darse el caso de un documento público que sólo en una sección contenga datos confidenciales**. Por último, y conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley, la restricción de acceso a la información confidencial no es absoluta, pues puede permitirse su difusión, distribución o





C.2. Folio de la solicitud 330024622003507

Síntesis	Soporte documental del estatus procesal que guarda la Carpeta de Investigación FED/CDMX/SPE/0012675/2018
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	información clasificada parcialmente como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Solicito se me informe el **estatus procesal que guarda la Carpeta de Investigación FED/CDMX/SPE/0012675/2018** y el **soporte documental** respectivo. Gracias" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **FECOR**.

ACUERDO

CT/ACDO/0754/2022:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad determina **confirmar** la clasificación de reserva de los datos de personal sustantivo contenidos en el respecto del soporte documental que da cuenta de que se remitió la carpeta de investigación **FED/CDMX/SPE/0012675/2018**, en términos del **artículo 110, fracción V** de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años.

A efecto de que se entregue versión pública del documento requerido.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

De la Información Reservada

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

...
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;



Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Vigésimo tercero** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, **fracción V** de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que **pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud**.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se exponen las siguientes pruebas de daño:

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable.** Difundir información relativa a datos personales de los servidores y/o exservidores públicos de la Institución, o bien, divulgar información que permita evidenciar que realizaron actividades relacionadas con las facultades de esta Fiscalía General, permitiría hacerlos identificables frente a terceros que, por algún interés individual en contra de su persona o la institución, atentarían contra su vida, seguridad o salud, ya que dicho personal conoce de manera directa o indirecta información sobre la investigación y persecución de delitos federales y que sirven como insumo para que grupos criminales e incluso por grupos de la delincuencia organizada se alleguen de datos sobre líneas de investigación que se encontraban o encuentran en trámite y sobre la operación actual de la institución. Atento a lo anterior, la identificación plena del personal que labora o laboró en esta Institución, se encuentran en peligro latente de sufrir algún perjuicio en su vida o en su entorno, en razón a que se actualizan diversos riesgos, como lo son amenazas, extorsión y chantaje por parte de los diversos grupos delincuenciales inclusive del crimen organizado, lo que conlleva aumentar el riesgo a su vida e integridad, así como la de sus familiares y amistades.

Y más aún, el hacer públicos datos personales significa la adopción de niveles de riesgo importantes, ya que a través de esos datos pueden encontrarse en internet información como sus vínculos familiares, profesionales y de amistad, domicilio, cuentas de correo, nombres de familiares, situación económica, financiera, relaciones personales, entre muchos otros elementos de información que la ponen en un espacio de riesgo aumentado de manera exponencial con independencia de que tengan o no redes sociales.

Estas personas corren peligro al realizar tareas relacionadas con la investigación y persecución de los delitos federales, ya que se encuentran en constante estado de vulnerabilidad por el nivel de inseguridad que se vive en la República Mexicana, por lo que de hacer pública información de estos, se encontrarían en un estado de indefensión en el entendido de que tales datos podrían llegar a manos de grupos de la delincuencia organizada, los que sin reparo podrían ocupar la información proporcionada para atentar contra la vida de la persona o la de sus familiares, de ahí la necesidad de proteger los datos del personal que trabaja o trabajó en esta Institución.

No debe pasar desapercibido que los servidores y/o exservidores públicos de la Institución están y/o estuvieron sujetos a cambio de adscripción de acuerdo a las necesidades del servicio, por lo que, al prestar sus servicios en las diversas unidades



administrativas de la Fiscalía General de la República, adquieren y/o adquirieron información que en todo momento debe ser protegida para garantizar el sigilo, investigación y persecución de las diversas líneas de investigaciones a cargo de esta Institución Federal, mismas que hoy en día pueden seguir en trámite por diversos delitos de alto riesgo, como lo son desaparición forzada, tortura, homicidio, trata de personas, genocidio, secuestro, contra la salud, entre otros, y que ser de interés de terceros perteneciente a la delincuencia, pone en riesgo la vida, seguridad y salud de manera potencial del personal que labora o laboró en la institución, ya que dichas personas ajenas a la Institución realizaría actos inhumanos en contra de los exservidores públicos para allegarse de información. En ese sentido, resulta inevitable mencionar como referente los comunicados emitidos por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -112/181 y 130/182 - sobre por los lamentables hechos acontecimientos donde personal sustantivo adscrito a la PGR, el 05 de febrero del año 2018, se encontraba desaparecido; sin embargo, después de realizar exámenes necesarios a los cuerpos encontrados en el Estado de Nayarit, se comprobó que pertenecían a servidores a públicos sustantivos/operativos de esta institución, mismos que por su simple identificación fueron sujetos a actos atroces de tortura de conformidad con los dictámenes correspondientes.

- II. **Perjuicio que supera el interés público.** El resguardar la información de los servidores públicos o exservidores públicos que realizan o realizaron actividades dentro de esta Fiscalía General de la República, no afecta el interés público o social, sino que dicha protección en todo momento permite salvaguardar el interés jurídico tutelado consistente en la vida, seguridad y salud de dichos exfuncionarios, e incluso, la de sus familias y su círculo cercano, frente a terceros que por algún interés particular pretendan hacerlos identificables y localizables para inclusive someterlos a tratos inhumanos y de tortura o incluso llevarlos a las filas de la ilegalidad y que éstos mediante alguna extorsión o la aceptación de alguna suma de dinero, aprovechando el estatus de personas exservidoras públicas pudieran ser flancos sensibles y asequibles para obtener información útil relacionada con líneas de investigación en trámite a cargo de esta Institución que tiene como misión cumplir con las facultades encomendadas de investigación y persecución de los delitos del orden federal en beneficio de la sociedad en general.
- III. **Principio de proporcionalidad.** La reserva que se invoca relativa a la información del personal que labora o laboraba en la Institución, resulta el medio más proporcional y menos restrictivo ante el acceso a la Información de entregar dicha información, toda vez que la ponderación entre un interés particular de una persona que pretende ejercer su derecho humano de acceso a la información para obtener información de personal trabaja o trabajó en la Fiscalía General de la República, no debe sobrepasar el bien jurídico tutelado para proteger la vida, seguridad y salud, de sus familias y círculo cercano. Por lo tanto, la respuesta otorgada resulta el medio menos restrictivo, necesario y proporcional para, por un lado, salvaguardar el derecho de acceso a la información del particular, y por otro, asegurar la integridad de las personas velando por su vida, seguridad y salud, pues únicamente los datos personales del personal que realiza o realizó tareas relacionadas con la investigación y persecución de los delitos es lo que esta Institución está resguardando, lo que se traduce inevitablemente como la medida menos restrictiva para garantizar ambos derechos.



D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de término para dar respuesta a la información requerida:

CT/ACDO/0755/2022:

Los miembros del Comité de Transparencia determinan **autorizar** la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAIP.

- D.1. Folio 330024622003359
- D.2. Folio 330024622003362
- D.3. Folio 330024622003363
- D.4. Folio 330024622003364
- D.5. Folio 330024622003365
- D.6. Folio 330024622003368
- D.7. Folio 330024622003369
- D.8. Folio 330024622003372
- D.9. Folio 330024622003376
- D.10. Folio 330024622003382
- D.11. Folio 330024622003383
- D.12. Folio 330024622003385
- D.13. Folio 330024622003387
- D.14. Folio 330024622003391
- D.15. Folio 330024622003392
- D.16. Folio 330024622003394
- D.17. Folio 330024622003397
- D.18. Folio 330024622003398
- D.19. Folio 330024622003399
- D.20. Folio 330024622003402
- D.21. Folio 330024622003404
- D.22. Folio 330024622003408

Motivos que se expresan en el **Cuadro I. Solicitudes sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su ampliación de término para dar respuesta** que se despliega en la siguiente página.

Sin embargo, se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que, dentro del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 días hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y forma. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LFTAIP, el cual establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible.

Cuadro I. Solicitudes sometidas a consideración del Comité de Transparencia, para su ampliación de término para dar respuesta



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Folio 330024622003359 Fecha de notificación de prórroga 06/12/2022 Solicito copia de la carpeta de investigación que inició la Fiscalía Especializada de Control Regional en su Unidad Administrativa en Baja California Sur, en contra de quien resulte responsable, por el hecho tipificado como delito contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, derivado de una denuncia del departamento de asuntos Jurídicos de la Dirección Regional, Península de Baja California y Pacífico Norte, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). La denuncia fue interpuesta tras el hundimiento de la embarcación Fortius en el área de protección de flora y fauna en Balandra, Baja California Sur. Asimismo, solicito lo siguiente: 1. Listado de las diligencias que han sido realizadas por el agente del ministerio público desde que se inició la investigación a la fecha. 2. Copia del dictamen de cuantificación del daño ambiental y propuesta de remediación en el área natural protegida de que se trata. 3. Determinación del monto de la reparación del daño. 4. Fecha en la que se inició la carpeta de investigación. 5. Número de carpeta de investigación. 6. Estatus en que se encuentra. 7. Amparos que han sido interpuestos.</p>	<p>Solicitada por análisis de la UTAG</p>
<p>Folio 330024622003362 Fecha de notificación de prórroga 06/12/2022 SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1. ¿ Cuántas carpetas de investigación se integraron en los años 2019, 2020, 2021 a noviembre 2022 relacionados con los delitos de robo de hidrocarburos, robo de embarcaciones, contrabando, trafico ilegal de personas, armas, estupefacientes, cometidos en las zonas marinas mexicanas? específicamente en Tabasco, Tamaulipas, Baja California, Michoacán y Veracruz. 2. ¿En relación a la pregunta que antecede, en cuántas carpetas de investigación se vinculó a proceso? 3. ¿Cuántas Fiscalías especializadas existen para la investigación de delitos cometidos en las zonas marinas mexicanas?específicamente en Tabasco, Tamaulipas, Baja California, Michoacán y Veracruz 4. ¿Cuántos Agentes del Ministerio Público Federal cuentan con estudios especializados en temas marítimos o en su caso que hayan realizado estudios por su cuenta, en temas marítimos? en Tabasco, Tamaulipas, Baja California, Michoacán y Veracruz</p>	<p>Solicitada por falta de respuesta de la OM</p>
<p>Folio 330024622003363 Fecha de notificación de prórroga 06/12/2022 1.- Se solicita se entregue información sobre el número de personas a las que se han detenido y procesado bajo el cargo de posesión simple de marihuana (cannabis) entre enero 2019 hasta fecha de esta solicitud. Desglosar por estado del país y mes. 2.- Se solicita se indique el número de carpetas de investigación y por separado las averiguaciones previas abiertas entre el mismo periodo mencionado por posesión simple de marihuana en el país. Desglosar por estado del país y mes. 3.- Se solicita se entregue folio o número identificable de cada uno de los expedientes de las sentencias condenatorias por casos de posesión simple de cannabis (marihuana) en el periodo mencionado. 4.- Número de personas a las que se les ha dictado prisión preventiva</p>	<p>Solicitada por análisis de la respuesta de la OM</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
como medida cautelar por posesión simple de marihuana en el periodo mencionado. Desglosar por estado del país y mes.	
Folio 330024622003364 Fecha de notificación de prórroga 06/12/2022 Solicito la información relacionada con el número de denuncias recibidas por el delito de tráfico de órganos desde el año 2018 a fecha de esta solicitud. Los datos desglosados divididos por estado y año de la denuncia. -cuántas órdenes de aprehensión -cuántas sentencias	Solicitada por análisis de la UTAG
Folio 330024622003365 Fecha de notificación de prórroga 06/12/2022 REOKSF 1. Solicito toda la expresión documental de los acuerdos reparatorios firmes en donde el imputado sea un miembro de las Fuerzas Armadas: Sedena, Semar y Guardia Nacional de 2015 a octubre de 2022.	Solicitada por análisis de la UTAG
Folio 330024622003368 Fecha de notificación de prórroga 07/12/2022 Favor de proporcionar informes de Cuantas Carpetas de Investigación se recibieron en el período comprendido entre 2019 y 2021 y de estas cuantas adquirieron el estado de Archivo Temporal. Cuantas carpetas de investigación procedieron conforme al artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales	Solicitada por análisis de la UTAG
Folio 330024622003369 Fecha de notificación de prórroga 07/12/2022 Favor de proporcionar Informes de la cantidad de Carpetas de Investigación sobre el periodo 2019 a 2021 y de estas cuales se ubicaron como Archivo Temporal. Además, solicito Informe de la ubicación de estas carpetas de investigación en base al artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, correspondiente al periodo 2019-2021.	Solicitada por análisis de la UTAG
Folio 330024622003372 Fecha de notificación de prórroga 07/12/2022 Solicito la siguiente información 1. Número total de personas detenidas por esa dependencia en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (a la fecha) desagregando o especificando tales totales por entidad federativa y municipio (incluyendo a la Ciudad de México y sus alcaldías) 2. La anterior información (1) desagregada por año, mes y día de la detención (a la fecha) 3. Para la información solicitada en los numerales 1 y 2, especificar para cada caso el presunto motivo y/o causa de la detención 4. Para la información solicitada en los numerales 1, 2, y 3, especificar para cada caso si el presunto motivo y/o causa de la detención fue del fuero común o del fuero federal 5. Solicito que la anterior información sea entregada en formato electrónico o digital de hojas de cálculo del programa o software Excel	Solicitada por análisis de la UTAG
Folio 330024622003376 Fecha de notificación de prórroga 07/12/2022 Solicito se me informe cuántas detenciones de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación se han realizado en Jalisco en los últimos 5 años.	Solicitada por análisis de la UTAG
Folio 330024622003382 Fecha de notificación de prórroga 09/12/2022	Solicitada por



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
Se solicita información estadística: a cuántos testigo protegidos se les otorgó, del año 2000 a la fecha de respuesta, el beneficio del cambio de identidad y cambio de residencia, es decir a cuántos se les envió a otro país, se pide que los datos seas desglosados por año. Asimismo, a cuántos se les siguen otorgando beneficios económicos y a cuanto ascendió y asciende la erogación que debe realizar la FGR.	falta de respuesta de la AIC y la FEAI
Folio 330024622003383 Fecha de notificación de prórroga 09/12/2022 Se solicita número de servidores públicos de la FGR que se han acogido a los programas de retiro voluntario de diciembre de 2018 a la fecha de respuesta. Se solicita que esta información sea desglosada por categoría o cargo. Cuánto ha tenido que erogar la FGR para pagar los retiros voluntarios de sus servidores públicos en el periodo mencionado. Cuántos elementos de la Policía Federal Ministerial han sido dados de baja por incurrir en irregularidades o delitos de diciembre de 2018 a octubre de 2022, y qué tipo de irregularidad o delito incurrieron. Cuántos funcionarios de la FGR se encuentran sujetos a investigación por abuso de autoridad, acoso, desaparición forzada y actos de corrupción de diciembre de 2018 a octubre de 2022.	Solicitada por la OM por búsqueda de información por parte del área responsable
Folio 330024622003385 Fecha de notificación de prórroga 09/12/2022 1. Número total de carpetas de investigación que el MP Federal ha integrado en la CDMX desde el inicio del nuevo sistema penal, es decir del 18 de junio de 2016 a la fecha. 2. Número total de carpetas de investigación que el MP Federal ha integrado a nivel nacional -excluyendo las de la CDMX- desde el inicio del nuevo sistema penal, es decir del 18 de junio de 2016 a la fecha. 3. En el periodo referido (del 18 de junio de 2016 a la fecha) en cuántas carpetas de investigación integradas en la CDMX se decretó la libertad del imputado por violaciones al procedimiento cometidas durante la integración de esas carpetas. 4. En el periodo referido (del 18 de junio de 2016 a la fecha) en cuántas carpetas de investigación integradas a nivel nacional -excluyendo las de la CDMX- se decretó la libertad del imputado por violaciones al procedimiento cometidas durante la integración de esas carpetas. 5. En el periodo referido (del 18 de junio de 2016 a la fecha) número de carpetas de investigación integradas a nivel nacional -excluidas las de la CDMX- donde se haya decretado la libertad del imputado con motivo de un juicio de amparo. 6. En el periodo referido (del 18 de junio de 2016 a la fecha) número de carpetas de investigación integradas en la CDMX donde se haya decretado la libertad del imputado con motivo de un juicio de amparo. 7. En el periodo referido (del 18 de junio de 2016 a la fecha) número de carpetas de investigación integradas a nivel nacional -excluidas las de la CDMX- donde se haya decretado la libertad del imputado con motivo de un juicio de amparo concedido por violaciones cometidas durante el procedimiento penal o la integración de las carpetas de investigación. 8. En el periodo referido (del 18 de junio de 2016 a la fecha) número de carpetas de investigación integradas en la CDMX donde se haya decretado la libertad del	Solicitada por la análisis de la UTAG



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>imputado con motivo de un juicio de amparo concedido por violaciones cometidas durante el procedimiento penal o la integración de las carpetas de investigación. 9. ¿Alguno de los agentes del MP Federal que integró esas carpetas de investigación fue destituido o sancionado? 10. En el periodo referido (del 18 de junio de 2016 a la fecha) ¿cuántos Agentes del MP Federal han sido destituidos o sancionados? 11. ¿Cuál fue el motivo que originó la sanción o destitución en cada caso? 12. ¿Con cuántos Agentes del MP Federal cuentan actualmente? 13. ¿Cuál es el sueldo de los Agentes del MP Federal? -el de cada uno dependiendo del código y nivel- 14. ¿Cómo se integra el sueldo? 15. ¿Qué funciones realiza el Agente del Ministerio Público de la Federación Jefe código FGoF001, nivel FZ1? 16. ¿Qué funciones realiza el Agente del Ministerio Público de la Federación Coordinador código FGoF002, nivel FZ2? 17. ¿Qué funciones realiza el Agente del Ministerio Público de la Federación Supervisor código FGoF003, nivel FZ3? 18. ¿Qué funciones realiza el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular código FGoF004, nivel FY1? 19. ¿Qué funciones realiza el Agente del Ministerio Público de la Federación Revisor código FGoF005, nivel FY2? 20. ¿Qué funciones realiza el Agente del Ministerio Público de la Federación Asistente código FGoF006, nivel FY3? 21. ¿Se aplican exámenes a los Agentes del MP Federal? 22. ¿Qué tipo de exámenes se aplican? -todos los tipos- 23. ¿En qué supuestos se aplican esos exámenes? 24. ¿Con qué periodicidad se aplican dichos exámenes? 25. Para la permanencia en el puesto de MP Federal ¿es obligatoria alguna capacitación periódica? 26. ¿Cada cuándo se capacita a los agentes del MP Federal? 27. Para la permanencia en el puesto de MP Federal ¿es obligatorio tomar exámenes de aptitud periódicos? 28. ¿Con qué frecuencia se aplican los exámenes de aptitud? 29. ¿Quién califica los exámenes de aptitud? 30. ¿Cuántas personas han perdido el cargo por no aprobar los exámenes en cuestión? 31. ¿Se otorga algún tipo de incentivo a los agentes que acrediten alguna capacitación? y de ser el caso ¿en qué consiste?</p> <p>Folio 330024622003387 Fecha de notificación de prórroga 09/12/2022 Buenos días. Solicito a su dependencia información estadística de ser posible en formato editable .xlsx, .csv, .dbf o .dta) sobre: Número de carpetas de investigación iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de robo de hidrocarburos o algún otro ilícito relacionado con la sustracción, resguardo, transporte, almacenamiento, distribución, posesión, suministro u ocultamiento de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento, al igual que, dañar las instalaciones utilizadas para el transporte de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, desagregado por año, mes, entidad y tipo de delito, del 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 2018.</p> <p>Folio 330024622003391 Fecha de notificación de prórroga 09/12/2022 Descripción de la solicitud: Solicito la siguiente información: 1. ¿Cuál es el número total de querellas y/o denuncias presentadas por</p>	<p>Solicitada por la OM por búsqueda de información por parte del área responsable</p> <p>Solicitada por la OM por búsqueda de información por parte del área</p>



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>la Procuraduría Fiscal de la Federación durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022 en la Fiscalía General de la República?</p> <p>2. ¿Cuántas querellas y/o denuncias provenientes de la Procuraduría Fiscal de la Federación se presentaron en la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros -UEIDFF-?</p> <p>3. ¿De la totalidad de querellas y/o denuncias presentadas en dichos años por Procuraduría Fiscal de la Federación cuántas se presentaron en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, la cual orgánicamente pertenece a la Fiscalía General de la República?</p> <p>4. ¿En qué fecha se presentaron las querellas y/o denuncias previamente citadas en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción?</p> <p>5. ¿Por qué delitos se presentaron las querellas y/o denuncias referidas en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción?</p> <p>6. ¿En qué estado procesal se encuentran las querellas y/o denuncias presentadas en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción promovidas por la Procuraduría Fiscal de la Federación?</p> <p>Datos complementarios: La solicitud se encuentra dirigida a la Procuraduría Fiscal de la Federación y a la Fiscalía General de la República.</p>	responsable
<p>Folio 330024622003392 Fecha de notificación de prórroga 09/12/2022</p> <p>Se requiere conocer el número de tomas clandestinas detectadas en los años de 2019, 2020, 2021, y 2022, al igual que la ubicación de éstas. ¿Cuántas denuncias se realizaron por la detención de tomas clandestinas en los años de 2019, 2020, 2021, y 2022? ¿Cuántos recursos se destinaron para la detección de tomas clandestinas en los años de 2019, 2020, 2021, y 2022</p>	Solicitada por la OM por búsqueda de información por parte del área responsable
<p>Folio 330024622003394 Fecha de notificación de prórroga 09/12/2022</p> <p>Descripción de la solicitud: Que acciones se han desarrollado tanto en términos de normas, como de acciones implementadas en las instituciones publicas de la entidad, para hacer posible el Sistema de Control Interno Institucional, establecido en el "Marco Integrado de Control Interno para el Sector Publico", el cual es promovido en el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción, así como del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción? Favor de proporcionar documentos relativos a: Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación; y Supervisión y Mejora</p> <p>Datos complementarios: Favor de proporcionar la documentación correspondiente a: 1. Marco Normativo de Control de Interno 2. Programa Anual de Control Interno 3. Programa Anual de Administración de riesgos 4. Procesos y/o procedimientos desarrollados.</p>	Solicitada por la OM por búsqueda de información por parte del área responsable
<p>Folio 330024622003397 Fecha de notificación de prórroga 12/12/2022</p> <p>Descripción de la solicitud:</p>	Solicitada por la OM por búsqueda



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
Por medio del presente, me dirijo a ustedes con la finalidad de solicitar información de interés que coadyuve académicamente en mi proyecto de investigación, el cual persigue objetivos sociales en favor de la procuración de justicia por lo que es factible compartir con ustedes la directriz para esta investigación: Actualmente México se encuentra referenciado por la sociedad y por organismos no gubernamentales nacionales e internacionales como un país con una crisis forense en temas de identificación humana, advirtiéndole consecuencias que afectan directamente a víctimas desaparecidas, cadáveres no identificados o desconocidos, así como los familiares de las víctimas, por lo que el objetivo primordial en esta investigación es proporcionar al personal vinculado y encargado a la investigación forense información científica y metodológica que aporte un modelo técnico auxiliar en el análisis e interpretación criminalístico de prendas de vestir relacionadas con cadáveres no identificados y desconocidos en el proceso de la identificación humana. Se adjunta archivo de word editable para mayor facilidad y manejo de las instituciones. Datos complementarios: Información cualitativa y cuantitativa, relacionada con cadáveres y restos humanos no identificados, así como información de las prendas de vestir que presentaban al momento de su localización, en el periodo 01 de enero 2020 al 31 de diciembre de 2020.	de información por parte del área responsable y falta de respuesta de la AIC
Folio 330024622003398 Fecha de notificación de prórroga 12/12/2022 Con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, me dirijo a la Fiscalía General de la República (FGR), con la siguiente solicitud de datos para un libro sobre tráfico de armas: 1) La cantidad, tipos, modelos, calibres de las armas aseguradas durante las confrontaciones con los civiles armados que atacaron la presidencia municipal de Villa Unión en 30 de noviembre de 2019. 2) El número de las armas aseguradas después del ataque en Villa Unión ocurrido el 30 de noviembre de 2019 que fueron rastreadas por ATF y los puntos de venta de cada una de esas armas (por lo menos el condado y estado). Gracias.	Solicitada por falta de respuesta de la FEMDO
Folio 330024622003399 Fecha de notificación de prórroga 12/12/2022 Descripción de la solicitud: 1.- Muestre el historial (desde la primera certificación a la última) que detalle los costos de todas y cada una de las certificaciones "ISO 37001:2016" convenida entre la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República y Global STD Certification. 2.- Exhiba las facturas o comprobantes correspondientes de los pagos efectuados entre FEAI y Global STD Certification por la prestación de servicios "ISO 37001:2016". 3.- En caso de provenir de un recurso de la federación señale la partida presupuestal y monto que corresponde. 4.- Muestre los resultados de todas las certificaciones y/o de recomendaciones hechas a la FEAI, por parte de la norma "ISO 37001:2016". 5.- Exhiba el contrato de prestación de servicios entre la FEAI y Global STD Certification, para la prestación de servicios en materia de la norma	Solicitada por análisis de la respuesta de la FEAI



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>*ISO 37001:2016*. Datos complementarios: Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República, tel. 800 890 9780.</p> <p>Folio 330024622003402 Fecha de notificación de prórroga 12/12/2022 Adjunto al presente remito a Usted, escrito de fecha 06 de noviembre de 2022, mediante el cual solicito al Licenciado Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la Fiscalía General de la República, tenga a bien de entregar información pública que se encuentra en los archivos físicos y electrónicos de esa H. Autoridad a su cargo.</p>	Solicitada por la OM por búsqueda de información por parte del área responsable
<p>Folio 330024622003404 Fecha de notificación de prórroga 12/12/2022 Solicito conocer cuántas cuentas bancarias se han congelado por presuntos hechos de corrupción, enriquecimiento de procedencia ilícita, o cualquier otro tipo de delito en el estado de Tamaulipas del año 2018 al día de esta solicitud. Por fecha del congelamiento, monto de dinero que fue congelado, delito que se investiga y si ya fue turnada a otra instancia el caso. También conocer de estas cuentas cuántas fueron descongeladas por la orden de un juez. La solicitud es dirigida a este sujeto ya que la Unidad de Inteligencia Financiera a través de la Secretaría de Hacienda declaró incompetencia y señaló que es competencia de la FGR.</p>	Solicitada por análisis de la UTAG
<p>Folio 330024622003408 Fecha de notificación de prórroga 12/12/2022 Favor de responder el archivo adjunto</p> <p>Favor de responder:</p> <p>¿Cuántas denuncias penales y/o querellas recibió por Pornografía Infantil en el ámbito federal? Favor de señalar las denuncias de los años 2020, 2021 Y lo que va del 2022.</p> <p>¿Cuántas denuncias penales y/o querellas recibió por Pornografía Infantil en el ámbito federal en medios digitales como internet, redes sociales etc.? Favor de señalar las denuncias de los años 2020, 2021 Y lo que va del 2022.</p> <p>¿Cuántas carpetas de investigación se han abierto por delitos relacionados con Pornografía Infantil en el ámbito federal? Favor de señalar el número de carpetas de los años 2020,2021 Y lo que va del 2022.</p> <p>¿Cuántas determinaciones de archivo temporal se han emitido por parte del Ministerial Público relacionados con Pornografía Infantil en al ámbito federal? Favor de señalar el número de los años 2020, 2021 Y lo que va del 2022.</p> <p>¿Cuántas determinaciones de no ejercicio de la acción penal se han emitido por parte del Ministerio Público por pornografía Infantil en el ámbito federal? Favor de señalar el número de los años 2020,2021 y lo que va del 2022.</p> <p>¿Cuántas determinaciones de salidas alternas se han emitido por parte del Ministerio Público en materia de pornografía infantil en al ámbito federal ? Favor de señalar el número de los años 2020, 2021 y lo que va del 2022.</p> <p>¿Cuántas solicitudes de audiencia inicial se han emitido por parte del</p>	Solicitada por la OM por búsqueda de información por parte del área responsable



DETALLE DE LA SOLICITUD	MOTIVO DE AMPLIACIÓN
<p>Ministerio en materia de pornografía infantil en al ámbito federal y cuántas se han otorgado por las y los Jueces? Favor de señalar el número de los años 2020, 2021 Y lo que va del 2022.</p> <p>¿Cuántos autos de vinculación a proceso se han emitido por el Juez de Control por delitos relacionados con en materia de pornografía infantil en al ámbito federal y cuántas se han otorgado por las y los Jueces? Favor de señalar el número de los años 2020, 2021 Y lo que va del 2022.</p> <p>¿Cuántas solicitudes de medidas cautelares se han solicitado y cuántas se han emitido en materia de pornografía infantil en al ámbito federal? Favor de señalar el número de los años 2020, 2021 Y lo que va del 2022.</p> <p>¿Cuántas acusaciones ante el Juez de Control ha realizado el Ministerio Público por delitos relacionados en materia de pornografía infantil en al ámbito federal? Favor de señalar el número de los años 2020, 2021 Y lo que va del 2022.</p> <p>¿Cuántas formulaciones de imputación ha realizado el Ministerio Público por delitos relacionados en materia de pornografía infantil en al ámbito federal? Favor de señalar el número de los años 2020,2021 Y lo que va del 2022.</p> <p>¿Cuántas audiencias de juicio oral por delitos relacionados con violaciones en materia de pornografía infantil en al ámbito federal? Favor de señalar el número de los años 2020, 2021 Y lo que va del 2022.</p> <p>¿Cuántas sentencias condenatorias y absolutorias por violaciones en materia en materia de pornografía infantil en al ámbito federal? Favor de señalar el número de los años 2020, 2021 y lo que va del 2022.</p> <p>¿Qué áreas especializadas para la investigación, procuración o impartición de justicia existen en materia de pornografía infantil en al ámbito federal?</p> <p>¿Cuántas personas servidoras públicas se encuentran especializadas en materia de pornografía infantil en al ámbito federal?</p>	



IV. Asuntos generales.

PUNTO 1.

➤ Mensaje de la Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la presidente del Comité de Transparencia.

La Titular de la UTAG reiteró a los enlaces de transparencia de las diversas unidades administrativas que integran la estructura orgánica de esta Fiscalía General de la República que, la información que se proporciona como respuesta a las solicitudes de información, es responsabilidad exclusiva de los titulares de cada unidad administrativa; por lo que, cuando sus pronunciamientos así lo ameriten, deberán remitir además, la aclaración o precisión que justifique cualquier cuestionamiento mediático a la institución.

[illegible]



Tomando la votación de cada uno de los integrantes del Colegiado de Transparencia para cada uno de los asuntos de conformidad con lo que se plasmó en la presente acta, se da por terminada la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria electrónica del año 2022 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES

Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la
presidente del Comité de Transparencia.

Lic. Carlos Guerrero Ruiz

Suplente del Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales, representante
del área coordinadora de archivos

Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina

Suplente del Titular del Órgano
Interno de Control

Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró

Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA¹
CUADRAGÉSIMA CUARTA
SESIÓN ORDINARIA 2022
6 DE DICIEMBRE DE 2022**

¹En términos de lo dispuesto en los transitorios Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y artículo 97 de la Ley de la Fiscalía General de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República.



E. Cumplimiento a las resoluciones del INAI:

E.1. Folio de la solicitud 330024622002489 – RRA 15841/22

Síntesis	Evidencia documental que da cuenta de los recursos económicos otorgados al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Fiscalía General de la República del año 2015 al 2022
Comisionada ponente	Norma Julieta del Río Venegas
Sentido de la resolución INAI:	Revoca
Rubro CT:	Información clasificada como reservada

Solicitud:

"Bajo el principio jurídico de máxima publicidad y con fundamento en lo previsto en los artículos 4°, 6° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en correlación con los artículos 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24 y demás relativos aplicables a la Ley de General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ocurrimos ante esta Autoridad a formular de manera legítima, clara y precisa y al ser un ente público sujeto obligado, para que la Fiscalía General de la República, informe con respecto a la siguiente solicitud:

1.- Que diga de manera clara, precisa y detallada, los **montos y periodicidad de los recursos económicos públicos que entrega a el Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Fiscalía General de la República**, en cumplimiento a las Condiciones Generales de la P.G.R. vigentes, para que pueda adquirir bienes y servicios para otorgarlos a los trabajadores agremiados que se encuentran afiliados a dicha Organización Sindical en su calidad de ente público, considerando en dicha solicitud como prestaciones con motivo de 10 de mayo, día de la secretaria y del padre, fin de año, cursos de verano para los hijos de sus agremiados, excursiones, apoyo para deportes, y otros que reciba para adquirir bienes o servicios para los trabajadores, comprendiéndose en dicho informe desde el año 2015 a la fecha del 2022.

2.- Que diga con respecto a los **recursos públicos que entrega periódicamente a el Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Fiscalía General de la República, cuáles son los parámetros, directrices o métodos que se emplean para la adquisición de bienes y servicios que se otorgan a los trabajadores agremiados por conducto de la Organización Sindical como ente Público**. Es decir, la forma que se emplea para elección de proveedores, estudio de mercado (precio, calidad y garantía de los mismos, procedimiento para la adquisición de bienes o contratación de servicios de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público) factores que se deben observarse y cumplirse para la adquisición de bienes o servicios por ser recursos públicos y los cuales se otorgan a los trabajadores agremiados a razón de prestaciones que se encuentran previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.



3.- Que diga si los recursos públicos asignados al Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Fiscalía General de la República para ser otorgados a los trabajadores agremiados a su Organización y como ente público para su entrega de las prestaciones mencionadas en el punto 1, se le otorgan por cada trabajador, mencionado por lo tanto **los montos recibidos para adquisición de estos bienes y servicios a que tienen derecho como prestación, esto de manera detallada por año debiendo de considerar por lo menos desde el año 2015 a la fecha de la contestación del año curso.**

4.- Que diga los **montos y periodicidad de los recursos públicos que se le otorgan** a el Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Fiscalía General de la República por parte de esta Institución, para la funcionalidad y desempeño de sus actividades como Sindicato y como apoyo al mismo, lo anterior de manera precisa, clara y detallada, especificando los conceptos y la forma en que se aplican estos recursos públicos, es decir, la forma en que se distribuyen estos recursos públicos que se reciben para este fin, así mismo especificar cuantos y desde cuando dicha Organización tiene asignado transporte terrestre (vehículos automotrices) para el desempeño de sus actividades, debiéndose detallar de manera clara y precisa por año, debiendo de considerar por lo menos desde el año 2015 a la fecha de la contestación del año en curso.

La información se solicita de manera desglosa de los años mencionados en cada uno de los puntos citados con antelación, debiendo anexar las evidencias o documentación correspondiente para cada uno de los conceptos." (Sic)

Gestión de la solicitud:

En respuesta inicial, se informó al particular que la presente solicitud se turnó a la **OM**, quien señaló que: "...la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su **artículo 79**, dispone lo siguiente:

Artículo 79. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información aplicable del artículo 70 de esta Ley, la señalada en el artículo anterior y la siguiente:

I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;

II. El directorio del Comité Ejecutivo;

III. El padrón de socios, y

IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan.

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios.

Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la información.

(Lo resaltado es nuestro)

En razón de lo anterior, y al ser **los propios Sindicatos, sujetos obligados conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán ser estos los que conforme al principio de máxima publicidad otorguen la información solicitada**".



Mediante recurso de revisión, la particular se inconformó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el particular alegó lo siguiente:

Razón de la interposición:

Con fundamento en el artículo 138 y demás relativos de la LGTAIP, la respuesta del sujeto obligado y conforme a las facultades conferidas por lo que hace a la entrega de recursos públicos, **no lo exime de proporcionar la información solicitada argumentando que es otro sujeto obligado quien es el competente para dar la información solicitada**, siendo de relevancia que como trabajadores se conozca las cantidades que se entregan por cada trabajador para el cumplimiento y entrega de sus prestaciones como complemento a sus remuneraciones que entrega el sujeto obligado al Sindicato para la adquisición de bienes bienes y servicios que se entregan periódicamente, considerando relevante esta información para conocer detalladamente como se aplican estos recursos

Con la finalidad de atender la inconformidad del particular, así como de rendir los alegatos correspondientes se volvió a requerir a la unidad administrativa el debido pronunciamiento, misma que reiteró la respuesta inicial y agrego:

No obstante lo anterior, atendiendo al principio de máxima publicidad, se volvió a realizar una búsqueda de lo requerido por lo que respecto a la **"descripción clara y precisa y detallada, los montos y periodicidad de los recursos económicos públicos que entrega a el Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Fiscalía General de la República, en cumplimiento a las Condiciones Generales de la P.G.R. vigentes, para que pueda adquirir bienes y servicios para otorgarlos a los trabajadores agremiados que se encuentran afiliados a dicha Organización Sindical en su calidad de ente público, considerando en dicha solicitud como prestaciones con motivo de 10 de mayo, día de la secretaria y del padre, fin de año, cursos de verano para los hijos de sus agremiados, excursiones, apoyo para deportes, y otros que reciba para adquirir bienes o servicios para los trabajadores, comprendiéndose en dicho informe desde el año 2015 a la fecha del 2022."**, el área informó que en cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo de la Procuraduría General de la República, vigentes en términos de los Transitorios Quinto (aplicado a contrario sensu), Sexto y Décimo Segundo, fracción II, del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de diciembre de 2018, todo lo anterior, en vigor, de conformidad con los Transitorios Segundo, Cuarto, Sexto, Séptimo y Décimo Sexto (a contrario sensu), del Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021, **le fueron otorgados al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Fiscalía General de la República recursos económicos en los ejercicios correspondientes del 2015-2022, tal como se describe de manera clara, precisa y detallada los montos y la periodicidad de los mismos, conforme al siguiente recuadro:**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	JUNIO DE 2022
1,078,307.95	2,352,855.33	2,583,737.34	2,747,000.71	2,222,759.98	2,201,289.67	4,667,470.00	1,098,614.00

Por lo que corresponde a **"Que diga con respecto a los recursos públicos que entrega periódicamente a el Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Fiscalía General de la República, cuáles son los parámetros, directrices o métodos que se emplean para la adquisición de bienes y servicios que se otorgan a los trabajadores agremiados por conducto de la Organización Sindical como ente Público. Es decir, la forma que se emplea para elección de proveedores, estudio de mercado (precio, calidad y garantía de los mismos, procedimiento**



para la adquisición de bienes o contratación de servicios de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público) factores que se deben observarse y cumplirse para la adquisición de bienes o servicios por ser recursos públicos y los cuales se otorgan a los trabajadores agremiados a razón de prestaciones que se encuentran previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.", a "Que diga si los recursos públicos asignados al Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Fiscalía General de la República para ser otorgados a los trabajadores agremiados a su Organización y como ente público para su entrega de las prestaciones mencionadas en el punto 1, se le otorgan por cada trabajador, mencionado por lo tanto los montos recibidos para adquisición de estos bienes y servicios a que tienen derecho como prestación, esto de manera detallada por año debiendo de considerar por lo menos desde el año 2015 a la fecha de la contestación del año curso", así como a "Que diga los montos y periodicidad de los recursos públicos que se le otorgan a el Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Fiscalía General de la República por parte de esta Institución, para la funcionalidad y desempeño de sus actividades como Sindicato y como apoyo al mismo, lo anterior de manera precisa, clara y detallada, especificando los conceptos y la forma en que se aplican estos recursos públicos, es decir, la forma en que se distribuyen estos recursos públicos que se reciben para este fin, así mismo especificar cuantos y desde cuando dicha Organización tiene asignado transporte terrestre (vehículos automotrices) para el desempeño de sus actividades, debiéndose detallar de manera clara y precisa por año, debiendo de considerar por lo menos desde el año 2015 a la fecha de la contestación del año en curso." no se localizaron los parámetros, directrices o métodos que se emplean para la adquisición de bienes y servicios que con respecto a los recursos públicos que se otorgan al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Fiscalía General de la República y que se emplean para la adquisición de bienes y servicios que se otorgan a los trabajadores agremiados por conducto de la Organización Sindical como ente Público, tampoco se localizó información relativa a que si los recursos públicos asignados al Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Fiscalía General de la República para ser otorgados a los trabajadores agremiados a su Organización y como ente público para su entrega de las prestaciones mencionadas en el punto 1, se le otorgan por cada trabajador, los montos recibidos para adquisición de estos bienes y servicios a que tienen derecho como prestación, considerando por lo menos desde el año 2015 a la fecha de la contestación, de igual manera tampoco se localizó información relativa a los montos y periodicidad de los recursos públicos que se le otorgan a el Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Fiscalía General de la República por parte de la Institución, para la funcionalidad y desempeño de sus actividades como Sindicato y como apoyo al mismo, concatenado a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dice **"Artículo 86.- Las remuneraciones que se paguen a los directivos y empleados de los sindicatos y, en general, los gastos que origine el funcionamiento de éstos, serán a cargo de su presupuesto, cubierto en todo caso por los miembros del sindicato de que se trate."**, ni cuantos y desde cuando dicha Organización tiene asignado transporte terrestre (vehículos automotrices) para el desempeño de sus actividades.

Asimismo, **precisó que si bien la Dirección General de Recursos Humanos y Organización**, de conformidad con el artículo 71, fracción XII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vigente en términos de lo dispuesto por los Transitorios Quinto -a contrario sensu-, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018; todo lo anterior, en vigor, de conformidad con los Transitorios Segundo, Cuarto, Sexto, Séptimo y Décimo Sexto -a contrario sensu-, del Decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021, **es el área encargada de cubrir los importes, entre otros, a las representaciones sindicales, lo cierto es que no está obligada a elaborar un formato, documento o base de datos con las características y especificaciones requeridas por la persona solicitante**, resulta aplicable el **Criterio 03/17**, Segunda Época, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),"



En consecuencia, el INAI tras un análisis y estudio al caso, mediante resolución determinó:

"QUINTO. Estudio de fondo. (...)

*En consecuencia, se estima que el agravio de la persona recurrente deviene **FUNDADO**.*

*Con lo que de conformidad con el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto considera procedente **REVOCAR** la respuesta del sujeto obligado y se le **instruye** a efecto de que:*

- ♣ *Notifique a la persona solicitante el oficio de alegatos a través de la cuenta de correo electrónico proporcionada.*
- ♣ *Entregue vía correo electrónico, las **expresiones documentales que den cuenta de los recursos económicos otorgados al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Fiscalía General de la República.***

Además, la persona recurrente de conformidad con el último párrafo del artículo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública podrá presentar recurso de revisión en contra de la respuesta que se emita en cumplimiento a la resolución."

RESUELVE:

PRIMERO. *Por las razones expuestas en los considerandos de la presente resolución y con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se **REVOCA** la respuesta emitida por el sujeto obligado".*

Por ello, en cumplimiento a lo resuelto por el **INAI**, la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental (**UTAG**), solicitó a la Oficialía Mayor (**OM**), realizara las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se ocupa, misma que manifestó que por lo que hace a la evidencia documental que den cuenta de los recursos económicos otorgados al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Fiscalía General de la República, para los **años 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020**, no se localizó expresión documental que dé cuenta de lo requerido, no obstante se orienta al particular a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), específicamente en el módulo de "**Información Pública**", ya que en ese apartado puede localizar información de su interés.

Para los años **2017, 2021 y 2022**, se pone a disposición previo pago de costos de reproducción y/o envío, en 68 fojas útiles, versión pública de las documentales que dan cuenta de los recursos económicos otorgados al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Fiscalía General de la República, ya que contienen información que actualizan la clasificación de reserva por tratarse de números de cuentas bancarias, claves de rastreo, cuentas CLABE, códigos de barra, números de serie del certificado de seguridad y cadenas originales **de la Fiscalía General de la República y del Sindicato Nacional Independiente de los Trabajadores de la Fiscalía General de la República y que se encuentran en posesión de personas autorizadas**, para el acceso o consulta de información patrimonial, así como la realización de operaciones bancarias de diversa índole, y al difundir dicha información facilitaría que cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del titular de la cuenta, realice conductas tendientes a tal fin y tipificadas como delitos, con lo que ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos, tales como fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de créditos, entre otros; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracciones I, V y VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y **110, fracción I, V y VII** de



la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Décimo séptimo y Vigésimo Sexto de los Lineamientos Generales de Clasificación y Desclasificación de la Información.

Por lo que se pone a disposición del particular 68 fojas útiles en versión pública previo pago de costos de reproducción y/o envío.

Determinación del Comité de Transparencia:

ACUERDO

CT/ACDO/CUMPLIMIENTO/0109/2022:

Con fundamento en el artículo 65, fracción II y 169 de la LFTAIP, este Comité de Transparencia determina por unanimidad **confirmar** la clasificación de reserva de las cuentas bancarias, claves de rastreo, cuentas CLABE, códigos de barra, números de serie del certificado de seguridad y cadenas originales, contenidos en la evidencia documental que da cuenta de los recursos económicos otorgados al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Fiscalía General de la República, para los años **2017, 2021 y 2022**, con fundamento en el **artículo 110, fracciones I, V y VII** de la Ley Federal, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hasta por un periodo de cinco años.

Lo anterior, a efecto de poner a disposición del particular 68 fojas útiles en versión pública previo pago de costos de reproducción y/o envíos correspondientes.

Así las cosas, se trae a colación el referido precepto legal, que señala:

De la Información Reservada

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, **como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:**

...
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

...
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;

...
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

Robustece lo expuesto, lo contemplado en el numeral **Décimo séptimo, Décimo octavo, Vigésimo tercero y Vigésimo sexto** de los *Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, que a la letra señalan:

Décimo séptimo. De conformidad con el artículo 113, **fracción I** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la seguridad nacional cuando:

(...)



VII. Se puedan menoscabar, obstaculizar o dificultar las estrategias o acciones para combatir la delincuencia organizada, la comisión de los delitos contra la seguridad de la nación, entendiéndose estos últimos como traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

(...)

Asimismo, podrá considerarse como reservada aquella que revele datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de las instituciones encargadas de la seguridad nacional; sus normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignent.

Décimo octavo. De conformidad con el artículo 113, **fracción I** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que comprometa la seguridad pública, al poner en peligro las funciones a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios, tendientes a preservar y resguardar la vida, la salud, la integridad y el ejercicio de los derechos de las personas, así como para el mantenimiento del orden público.

Vigésimo tercero. Para clasificar la información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de la Ley General, será necesario acreditar un vínculo, entre la persona física y la información que pueda poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Vigésimo sexto. De conformidad con el artículo 113, **fracción VII** de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos. Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos:

- I. La existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite;
- II. Que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y
- III. Que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 102 de la LFTAIP, las cuales prevén que en los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión y a su vez motivar la confirmación de la clasificación de la información, señalando las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, se exponen las siguientes pruebas de daño:

Artículo 110, fracción I:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: Proporcionar los números de cuentas bancarias, claves de rastreo, cuentas CLABE; códigos de barra, números de serie del certificado de seguridad y cadenas originales; podría propiciar que miembros de la delincuencia organizada, cuenten con información financiera de la Fiscalía General de la República que les permitiera atentar contra la disponibilidad de los recursos económicos con que realiza sus funciones de procuración de justicia y seguridad nacional; provocando que dichas funciones no puedan llevarse a cabo



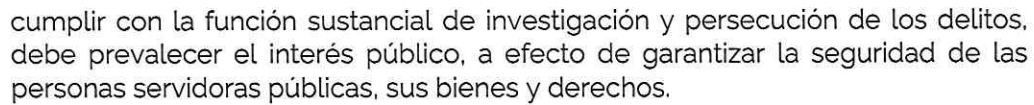
ante la afectación, obstrucción e incluso inhabilitación de las capacidades de reacción de esta Institución.

Revelar los números afectaría directamente la capacidad de operación financiera de la Institución, exponiéndose a eventos e incidentes de Seguridad de la Información, tales como conexiones y flujos de datos entrantes o salientes no autorizados, y la consecuente fuga de información financiera, poniendo en riesgo real de no poder hacer frente a sus obligaciones de pago con terceros, así como las inversiones diarias que realiza la Fiscalía, en tanto las Instituciones de Crédito, resuelven los incidentes de seguridad.

- II. Perjuicio que supera el interés público: Reservar la información que vulnera la seguridad financiera de esta Institución, supera el interés público a que se difunda, toda vez que se pondría en riesgo las capacidades de la Fiscalía, ya que dar a conocer los números de cuentas bancarias, claves de rastreo, cuentas CLABE; códigos de barra, números de serie del certificado de seguridad y cadenas originales; podría propiciar que el crimen organizado, realice con facilidad actividades que limiten, estropeen o anulen el operar de esta Institución en su lucha por la seguridad pública y nacional, al no poder disponer de recursos económicos para realizar sus funciones.
- III. Principio de proporcionalidad: El reservar la información no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la misma, en virtud de que dicha reserva sólo afecta los números de cuentas bancarias, claves de rastreo, cuentas CLABE; códigos de barra, números de serie del certificado de seguridad y cadenas originales, interés que debe prevalecer para garantizar que se evite un perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos, a través de la protección de los datos financieros de esta Fiscalía y así ésta pueda cumplir de manera segura y confiable con sus atribuciones para la Procuración de una Justicia Federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Artículo 110, fracción V:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: Proporcionar la información permitiría a los grupos del crimen organizado propiciar un daño a la Institución, al atentar contra la vida o integridad física o la seguridad de las familias de dichos servidores públicos que operan tales cuentas pudiendo afectarse la capacidad financiera de la Institución para el desempeño de sus funciones en beneficio de la seguridad de la sociedad en general.
- II. Perjuicio que supera el interés público: Proporcionar la información pondría en riesgo la vida o integridad física o la seguridad de sus familias, de dichos servidores públicos, lo cual se traduce en un detrimento a la capacidad de respuesta de la Institución para el combate a la delincuencia organizada, significando un perjuicio de la seguridad pública y vulnerando el interés social y, en su caso, el de los beneficiarios, mismo que es superior al interés particular del solicitante a conocer dicha información; por lo que tomando en consideración que esta Institución debe



- Por lo expuesto, se **instruye** a la **UTAG** hacer del conocimiento la presente resolución a las instancias competentes para los efectos a los que haya lugar y del mismo modo de **instruye** que se entregue un ejemplar de la presente acta al solicitante. - - - - -



La presente resolución forma parte de la Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y la
presidente del Comité de Transparencia.



Lic. Carlos Guerrero Ruíz

Suplente del Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales,
representante del área coordinadora de
archivos



Lic. Sergio Agustín Taboada Cortina

Suplente del Titular del Órgano
Interno de Control



Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaria Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró